

Diciembre 8 de 1954

44ª REUNION — 4ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del contraalmirante (R.) **ALBERTO TEISAIRE**, vicepresidente de la Nación,
y del ingeniero **ALBERTO J. ITURBE**, presidente provisional del Honorable Senado

Secretarios: señores **ALBERTO H. REALES** y **SANTIAGO A. JOB**

Prosecretario: doctor **ELEAZAR L. RODRIGUEZ**

SENADORES PRESENTES:

ALBARINO, Ramón A.
AMADO, Elias Teodoro F.
ANGULO, Rodolfo Antonio
ANTINUCCI, Atilio
BAZAN, Miguel Ángel
BRISOLI, Blas
CALVINO DE GÓMEZ, María Rosa
CASCO DE AGUER, María del Carmen
CASTANEIRA DE BACCARO, Hilda Nélida
CORREA, Antonio Eduardo
CORRECHÉ, Susan
DE PAOLIS, José Guillermo
DURAND, Alberto
GIMENEZ, Francisco
GRAZIANO, Alberto A.
HERRERA, Paulino B.
IBARGUREN, Prudencio M.
ITURBE, Alberto J.
JUAREZ, Carlos A.
NAVARRO, Ramón M.
PIERANGELI VERA, Humberto
PINEDA DE MOLINS, Ilda Leonor
RIERA, Fernando
RODRIGUEZ LEONARDI DE ROSALES, Elvira E.
RUIZ VILLASUSO, Eduardo Pío
VELAZCO, J. Filomeno
XAMENA, Carlos

AUSENTE, EN MISIÓN ESPECIAL:

LARRAURI, Juana

AUSENTES, CON LICENCIA:

DI GIROLAMO, Elena
FERRARI, Juan Antonio
LUCO, Francisco R.
ZAVALA ORTIZ, Ricardo

SUMARIO

1.—Asunto entrado:

Despacho de comisión. (Pág. 1045.)

2.—Licencia. (Pág. 1046.)

3.—Licencia. (Pág. 1046.)

4.—A moción del senador De Paolis se fija el asunto a considerar en la sesión. (Pág. 1046.)

5.—Consideración del despacho de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se actualizan normas sobre colonización. (Página 1046.)

6.—A moción del senador De Paolis se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta el día 9 a las 9 horas. (Pág. 1067.)

—En Buenos Aires, a los ocho días del mes de diciembre de 1954, a la hora 10 y 30, dice el

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

1

ASUNTO ENTRADO

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a dar cuenta de un asunto entrado.

Despacho de comisión

Sr. Secretario (Reales). — La Comisión de Agricultura y Ganadería ha producido despacho en el mensaje y proyecto de ley del Poder

Ejecutivo por el que se actualizan normas vigentes en materia de colonización.

Este despacho ha pasado directamente al orden del día de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del reglamento del Honorable Senado.

2

LICENCIA

Sr. Secretario (Reales). — El señor senador Zavala Ortiz solicita licencia para faltar a las sesiones de la presente semana.

Sr. De Paolis. — Pido la palabra.

Hago moción para que se acuerde, con goce de dieta, la licencia solicitada por el señor senador Zavala Ortiz.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Mendoza.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda acordada la licencia solicitada, con goce de dieta.

3

LICENCIA

Sr. Secretario (Reales). — La señora senadora Di Girolamo solicita licencia hasta el día 20 del corriente.

Sr. De Paolis. — Pido la palabra.

Hago moción para que se acuerde, con goce de dieta, la licencia solicitada por la señora senadora Di Girolamo.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Mendoza.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda acordada, con goce de dieta, la licencia solicitada.

4

MOCION FIJANDO EL ASUNTO A CONSIDERAR EN LA SESION

Sr. De Paolis. — Pido la palabra.

Hago moción para que en la sesión de la fecha se considere el orden del día número 98, que contiene el despacho de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se actualizan normas vigentes en materia de colonización.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Mendoza.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Así se procederá.

5

LEY DE COLONIZACION

(Orden del día número 98)

Sr. Secretario (Reales). — (*Leyendo*):

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Agricultura y Ganadería ha considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre colonización, y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación con las siguientes modificaciones:

Substitúyese el artículo 4º por el siguiente:

Artículo 4º — En toda adquisición de tierras con vistas al cumplimiento de esta ley, el banco recabará el pronunciamiento del consejo coordinador.

Substitúyese el inciso g), apartado 2º, del artículo 6º, por el siguiente:

g) Facilitar el acceso de los hijos argentinos de los actuales productores, a la actividad y propiedad agrarias.

Substitúyese el artículo 19 por el siguiente:

Artículo 19. — El precio de la tierra que se expropie en cumplimiento de esta ley, se fijará con sujeción a las normas estatuidas en los artículos 9º y 10.

Substitúyese el inciso e) del artículo 29 por el siguiente:

e) No padecer enfermedades crónicas ni defectos físicos que incapaciten para el trabajo rural.

Substitúyese el inciso e) del artículo 30 por el siguiente:

e) Cuenten con implementos agrarios, en relación con las exigencias de las actividades a encarar.

Substitúyese el artículo 37 por el siguiente:

Artículo 37. — No se adjudicará más de una unidad económica a una misma persona ni a sus hijos o padres, a menos que

éstos formen otra familia agraria. No obstante, toda persona que contara con seis hijos de cualquier sexo o cuatro varones, mayores de 14 años, que vivan o colaboren con ella, podrá solicitar tantos predios adicionales como veces reúnan este requisito.

Substitúyese el artículo 82 por el siguiente:

Artículo 82. — Declárase de orden público las prescripciones de esta ley, quedando derogadas las leyes 12.636; 12.355 en sus artículos 2º, 4º y 9º; el régimen de fomento especial de colonización del banco y demás normas legales que se opongan a la presente.

Las adjudicaciones sujetas a las leyes y normas que se derogan, continuarán rigiéndose por éstas, con excepción de las disposiciones de los artículos 61, 62, 63 y 64, que regirán para todos aquellos adjudicatarios que no hubieren recibido del banco el título de propiedad respectivo, a la fecha de promulgación de la presente ley.

De acuerdo con el artículo 90 del reglamento, se dispone que este despacho pase directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 7 de diciembre de 1954.

*Fernando Riera. — Susana Correché.
— Humberto Pierangeli Vera.*

PROYECTO DE LEY

—Es el mismo que se publica en la página 673.

ANTECEDENTE

Mensaje

—Es el mismo que se publica en la página 672.

Sr. Presidente. — En consideración.

Sr. Riera. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Riera. — Considera el Honorable Senado de la Nación el proyecto de ley de colonización enviado por el Poder Ejecutivo y despachado por la Comisión de Agricultura y Ganadería de este cuerpo.

Si el Congreso no hubiera tenido ocasión de tratar leyes de importancia fundamental para la marcha y el progreso del país, yo diría que, siguiendo el ritmo ascendente que marca la acción del gobierno peronista, asistimos al tratamiento de una ley de extraordinarias proyecciones, que además de afirmar en los hechos el

cumplimiento estricto de los postulados y objetivos del segundo Plan Quinquenal, indica una vez más la preocupación constante y firme del señor presidente de la Nación por la solución de los grandes problemas del país y por satisfacer aspiraciones de hondo contenido nacional. Este proyecto es una manifestación concreta del impulso renovador que el movimiento peronista trajo a la Nación, y es virtualmente una ley de avance revolucionario, con una concepción que la encuadra total y absolutamente dentro de los principios de la doctrina nacional. Su articulado responde magníficamente a los lineamientos de una política colonizadora que hace a la esencia misma de pensamientos y propósitos expresados repetidamente por el señor presidente cuando, en premisas admirables, fijaba cardinalmente los principios rectores de la reforma agraria y asentaba sobre bases sólidas las ideas directrices para el enfoque con que debía encararse la solución de tan importante problema que llega hoy con este proyecto que, en mi modesta opinión, honra al gobierno que lo envía y prestigia al movimiento que lo apoya. Es preciso reconocer —y enorgullece el proclamarlo— que concurrimos a la consideración de estas leyes y a su sanción respectiva para incorporar al cuerpo legal de la República nuevas células de vida, vigorizando el espíritu nacional.

Y es que lo vivifica, porque seguimos poniendo, malgrado la opinión opositora, nuestro propio latir de argentinos al gran corazón de la República, síntesis final y suprema de los sueños y de las esperanzas de nuestro movimiento.

En esta tarea sin pausa de ir cimentando los pilares que hacen la felicidad del pueblo y la prosperidad de la Nación es necesario insistir en la ciclópea tarea realizada por el movimiento justicialista; tarea de formación, de reordenamiento, de estabilización; tarea de conjunto con vistas a la solución integral de los distintos problemas que caracterizan la dinámica de la Nueva Argentina en la afiebrada actividad de un pueblo trabajando con fe ilimitada en sus destinos; tarea que, al no descuidar ningún ángulo, permite el enfoque preciso para la adecuada y amplia solución.

Entiendo que no es el momento de puntualizar los hechos y las realizaciones, de las cuales, desde luego, y eso es lo que interesa, tiene conciencia plena el pueblo que es su depositario y que lo que proclamo con la verdad de los hechos incontestables, es la verdadera pasión de gobernante y estadista del presidente de la República con los problemas del agro argentino.

Allí es donde yo veo al líder agitarse en sus fibras más íntimas y enarbolar más altos los principios de la revolución salvadora, cuando envía sus miradas sobre la inmensidad de los campos nuestros, iluminándose esas miradas con la irradiación que emerge de tanta luz bien-

hechora y proyectando sobre esos mismos campos la visionada gloria de la grandeza nacional.

Es así, señor presidente, cómo el envío de este proyecto de colonización marca la tónica precisa de una acción revolucionaria, que no supo ni sabe de desfallecimientos cuando se trata de reivindicar para el campo sus valores permanentes, sino que expresa meridianamente la evidencia concreta y clara de los pensamientos que sobre la materia, constante y sistemáticamente, ha expuesto el señor presidente de la República desde que gobierna esta patria.

Yo me voy a permitir, para que queden fijados, señor presidente, en esta sesión, expresar algunos conceptos del señor presidente de la Nación, porque pienso que es el mejor homenaje que podemos rendirle a nuestro líder, y porque creo que con esos pensamientos nosotros le damos al proyecto toda la realidad y toda la tónica que sabemos tiene el mismo.

El presidente de la República, en una síntesis admirable, cuando él estimaba que no había trabajadores de las ciudades y trabajadores rurales, sino que todos eran antes que estaban trabajando por la grandeza del país, hablando de la ley del Estatuto del Peón, decía que «la revolución no hubiera podido justificarse ante la historia si no hubiera impuesto que cesara la terrible situación del peón de campo». Afirmaba después: «No trabajamos en las ciudades pensando solamente en nuestras necesidades y en nuestra conveniencia. Cuando llegué a la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1944 el país tenía solamente dos leyes de protección al agro: la primera era la ley de pago en moneda nacional; la segunda era de accidentes del trabajo, que también se extendía a los que trabajaban en faenas agrícolas. Esa era toda la legislación que habíamos acumulado en un siglo de trabajo». Decía, después: «Lo primero que hemos hecho: la destrucción de los monopolios; esos monopolios eran los acopiadores dentro del Estado, que pagaban precios de hambre a los chacareros. Esos mismos monopolios eran los que obligaban a los chacareros a pagarles sueldos de hambre a sus peones.»

«Y esos monopolios han desaparecido del territorio de la República.»

«Cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, la capacidad de transporte, la capacidad de carga de los puertos y la capacidad de transporte a ultramar por barcos no alcanzaría a más de cuatro mil millones de pesos en el año. Ese transporte, que no permitía llegar a más de trescientas mil toneladas al mes, hubiera dejado la mitad del excedente de exportación en las chacras, para que se lo comiera el gorgojo o la palomita, para que los chacareros lo perdieran por su cuenta sin cobrar quizás un solo centavo. Y es que no existían medios de transporte para llevarlo a los puertos, para cargarlo en barcos y para enviarlo a ultramar.»

«El gobierno compró los camiones con que se transporta a las estaciones y a los puertos y aumentó el transporte ferroviario; llegó a exportar en un solo mes —después de arreglar los puertos, modificar los elevadores y cargar en tercera o cuarta andana los barcos en el puerto de Buenos Aires— un millón trescientas mil toneladas y, simultáneamente, compró los barcos necesarios para que hoy podamos transportar en nuestra flota un millón y medio de toneladas por mes. Todo ese trabajo fué hecho pensando solamente en el campo; no pensamos en otra cosa. Fué un esfuerzo de miles de millones de pesos que el Estado hizo para servir a sus agricultores, como era su deber, lo reconozco.»

Sigue diciendo el general Perón: «Nosotros hemos estabilizado el problema de la tierra en el campo. Primero fué la ley de prórroga de los arrendamientos rurales, impidiendo, en primer lugar, los desalojos y en segundo término, congelando los precios de arrendamientos. Si no lo hubiéramos hecho en 1944 ¿qué estarían pagando los chacareros por el arriendo de sus chacras?»

Fué sancionada la ley de arrendamientos y aparcería, cuyas ventajas, dice el general, son de extraordinarias proyecciones para los agricultores de la Nación.

«Hemos dado —afirma— otras leyes agrarias, como la ley forestal, la de investigaciones agrarias, la de fomento para semillas de pedigrée como así también leyes obreras, entre ellas el estatuto del peón, y hemos asegurado la justicia social agraria. En estos momentos, mediante un plan racional, comenzamos a lanzar los recursos del crédito hacia el agro argentino, y concordante con ello ya se ha acordado el tipo de crédito a largo, medio y corto plazo para los chacareros.

«Hemos creado el seguro agrícola, y la misma ley de arrendamientos y aparcerías rurales, estableciendo la justicia agraria, ha permitido que en el agro argentino no pueda entrar la justicia burocrática desarrollada a cientos de kilómetros, sino que sean los propios chacareros, con sus peones y con sus arrendatarios, quienes dilucidan los problemas del agro, sin otra intervención extraña que las comisiones paritarias.»

Ruego a mis honorables colegas me perdonen por seguir abundando en citas relacionadas con el pensamiento del presidente de la República, porque —insisto— es para nosotros la mejor lección y el mejor de los argumentos para votar esta ley.

Dice el general Perón, siempre refiriéndose a este problema: «Los países deben buena parte de su grandeza a la subdivisión de los latifundios y a la creación por ese medio, de gran número de pequeños propietarios rurales que arraigados de ese modo al suelo que elaboran, forjan el progreso del país. Aumentar el número de los propietarios, es el mejor camino para aumentar el

número de satisfechos. La tierra ha de ser un instrumento de trabajo y no de renta. La tierra que proporcione el Estado debe ser tierra barata, esto es, ajustada a su valor productivo y no un valor inflado por una especulación determinada por la puja incesante de las muchedumbres expoliadas, siempre dispuestas a sacrificar las condiciones de vida propias y de los suyos, en el afán de encontrar una chacra donde levantar su rancho. Sólo así podremos hacer de nuestra agricultura una industria estable y convertir nuestro campo en un mundo pleno de fe y optimismo.

«Defendemos el derecho de los que trabajan la tierra a obtenerla en propiedad mediante el producido de su trabajo. Aspiramos a que en el futuro no existan argentinos que después de haber trabajado grandes extensiones de tierra, no tengan siquiera un metro cuadrado donde sepultar sus restos.»

En realidad, señor presidente, insisto en estos pensamientos porque son sentencias tan precisas, claras y concretas, que alguna vez el pensamiento de Perón volará tan alto en la historia del futuro, que puedo asegurar que solamente tomándolo a Perón desde el ángulo defensor de los intereses agrarios, eso sólo justificaría la permanencia de este hombre en el manejo del gobierno.

Dice el general Perón: «Deseamos que la tierra sea de quien la trabaja. La esperanza del colono de ser dueño de la tierra que trabaja se va trocando hoy en una palpable realidad. El agro es, sin duda, en la República Argentina la fuerza que ha sostenido más sobre sus espaldas el peso de la economía de la Nación hasta nuestros días. Y ¿qué compensación ha tenido? Ninguna otra que estar dejado de la mano de Dios, allá en la chacra o en el campo donde se labra la riqueza de la Nación. Lo que el gobierno quiere, lo que nosotros queremos, es que esa situación no vuelva a producirse más en el agro argentino.»

Y este otro pensamiento: «Hemos de transformar el campo argentino, no solamente en el concepto de la tierra, guiados por el propósito de que la tierra sea del que la trabaja, sino con un sentido altamente económico y justo, que asiente a una clase agraria próspera sobre el suelo argentino, sobre la base de unidades económicas que respondan a las distintas condiciones de las zonas de producción del país y de cada tipo de explotación, y que no nos lleve mañana a una proliferación de pequeñas unidades por sucesivas subdivisiones que atenten contra la estabilidad económica del productor agrario, teniendo en cuenta la ubicación de las futuras generaciones argentinas.»

Para mí, señor presidente, estas palabras del general Perón son algo así como el pórtico y la justificación por donde entra este proyecto

de enmiendas a la ley de colonización, que tratamos esta mañana.

Esta ley, como dijera al principio, es de una importancia tan excepcional y extraordinaria, que, necesario es repetirlo, indica el punto altísimo de una política realizada con afecto y lealtad en favor del agro. Representa la exacta medida del gobierno que apunta con sabias disposiciones a una acción destinada a afirmar en el tiempo una actitud que señala en definitiva la postura peronista frente al problema de la tierra, postura tan distinta y tan distante de otras épocas que es preciso colocarla a manera de mojón indicador en sus páginas de historia, para que esa misma historia, con su fallo definitivo, diga la palabra final de verdad y de justicia sobre lo realizado por el movimiento peronista en este problema tan viejo como el mundo y de tan agudas proyecciones que por sí solas sirvieron para hacer entonar las marselesas de las rebeliones en muchos países de la tierra.

Es evidente, y en esto radica lo trascendente y lo invalorable de la obra de Perón, que estamos asistiendo a la reforma agraria sin violencias y sin odios, sin resentidos ni desplazados y mostrando que el hombre argentino está siendo dueño de la tierra al amparo de medidas que lo redimen de un ayer de oprobio y de inferioridad para colocarlo en una auténtica situación de dignidad y justicia.

Porque hemos tenido la suerte de asistir al maravilloso nacer de una revolución con los caracteres delineados por el líder, es que estamos contemplando cómo, con una serie de previsiones gubernativas, se llega a la solución de un problema —y la historia nos lo enseña— que requirió en otras partes luchas ardorosas y violentas, previsiones que han formado un sistema que no dudamos ha de satisfacer las ambiciones peronistas sobre la materia, interpretando justos anhelos que no son otros que realizar una reforma agraria sin sobresaltos y sin violencias, donde no se sepa del estado que toman las tierras, repartiéndolas de nuevo, manteniendo la posesión y organizando el trabajo colectivo; o de otras, poseyéndolas por medio de luchas cruentas, a la inversa de esta pacífica aplicación que se hace y que hará felices a muchos dentro del imperio absoluto de la ley y de la convivencia armónica de los factores que contribuyen a la grandeza y a la prosperidad de la Nación.

Tenemos todos los recursos para hacer posible que mostremos al mundo la solución eficiente y adecuada de este problema: elementos aptos y capaces para realizar productivamente el fin propuesto; crédito amplio y razonable, acción tutelar de un gobierno de orden y de equilibrio, que lleva adelante sus planes de trabajo en un clima de paz y de respeto y, sobre todo, inmensas y magníficas extensiones de terreno.

Es menester señalar que se han entregado miles de hectáreas sin despojo para nadie, y es evidente que este proyecto subraya una facultad constitucional del Estado con vistas a una mejor repartición de la tierra, ya que es necesario resaltar que hay demasiado suelo descampado improductivo en la República, porque no ha habido mucho interés en hacerlo producir en bien del progreso y la economía y en cuya salvaguardia debe necesariamente intervenir el Estado afirmando el principio de la Constitución Justicialista, cuando establece que la propiedad debe ser un bien social y trabajarse consiguientemente en función social.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, ingeniero Alberto J. Iturbe.

Señor presidente: del articulado del proyecto de ley se desprende, de manera evidente, la solución de las fallas que el estudio de este problema puso de manifiesto y su adecuada plantificación. Asimismo, surge el concepto implícito de fundamento de bien social, teniendo para ello en cuenta todas las exigencias y necesidades, no sólo desde el punto de vista social sino también espiritual, poniendo de tal forma y concretamente un criterio moderno de convivencia humana.

Se busca lograr no sólo un perfeccionamiento económico sino una integral estabilidad de quien se dedique a la tarea rural, cumpliendo una aspiración de radicación que tenga carácter permanente y definitivo.

Para lograrlo se ha procurado delimitar una perfectibilidad de posibilidades con proyecciones futuras de progreso, bienestar y prosperidad.

No se deja de lado la contemplación de los arbitrios necesarios para disponer de recursos legales que lleven la tranquilidad y la solución de los problemas que se puedan presentar ante las diversas contingencias en la vida del trabajo rural de todo orden y procurando que el conglomerado de esfuerzos en pos del bienestar que se busca esté relacionado entre sí de forma tal que, adecuando las posibilidades que cada uno de ellos ofrezca, se obtenga un resultado que sea la fiel expresión de las aspiraciones que se tienen al respecto.

Vemos así, entonces, que por el artículo 1º se adecua el proyecto de ley a los preceptos constitucionales, dejándose expresa constancia de su objetivo principal: que el campo argentino desarrolle e incremente su rendimiento racional en interés de la comunidad, facilitando a los trabajadores agrarios la posibilidad de convertirse en propietarios de las tierras que cultiven.

Por lo tanto, al significarse que la propiedad privada tiene una función social, está sometida a obligaciones con vistas al bien común y donde el trabajo tiene un trazo de bien definidas orientaciones.

Yo deseo señalar la significación social que adquiere la preocupación peronista de dar la tierra al que la trabaja; de hacerlo dueño de la parcela que fecunda con su vigor en la dura jornada de los días; en ese pedazo de suelo que acuna sus sueños y sus esperanzas y que por ser así adquiere para él la suprema razón de sus esfuerzos y siente que en esa lucha juega su sangre y su destino y la de los suyos y percibe acabadamente que por esa aspiración su trabajo es digno, bello y estimulante, y lo alienta a seguir con optimismo y fe; a atarse a la tierra; a enraizarse; a quererla y también a sufrir; que ella es eso: lágrimas y canto, esperanza y angustia; pero siempre sabiendo que la madre tierra es buena. Trabaja y lucha con la ambición de tenerla, con pasión y alma, creando un individuo distinto que piensa y obra a la inversa de aquel que alguna vez dijera, señor presidente: «¡Para qué voy a plantar un árbol; total, el terreno no es mío y nunca lo será!» Es el alegato más tremendo de la impotencia y la indiferencia, símbolo exacto de un pasado ya felizmente superado por el Justicialismo de Perón y el humanismo de Eva Perón, que ha afirmado en lo político, en lo económico y en lo social el Estado al servicio de su pueblo, sin otra intención que la de asegurar su bienestar con vista clara y precisa a que ese mismo pueblo, sonriente y feliz, labre con el sudor de cada día la grandeza de la patria; patria nuestra esta que está marcando ya derroteros distintos y precisos y que está siendo vista por el mundo entero como un oasis de paz, como un símbolo de redención social y como una imagen que ya se perfila grande y fuerte en el nuevo horizonte, indicando a ese mundo una forma de vida que ha de ser también distinta para todos los pueblos de la tierra si es verdad que se quiere hacer una humanidad fraterna y buena.

La firme finalidad de obtener que el interior del país sea poblado permanente y definitivamente con una efectiva racionalización de las explotaciones agrarias y una estabilización positiva, queda trasuntada perfectamente en la organización dada en el Banco de la Nación Argentina a su Gerencia Departamental de Colonización, dispuesta por el Ministerio de Finanzas, cuya actuación se basa en la orientación colonizadora estatal y cumple dos de sus postulados más destacables: cultivo de la tierra por quienes se interesan y pueden hacerla producir y la aplicación para ello de procedimientos científicos.

En la aplicación de las normas que se estatuyen interviene un consejo coordinador integrado por representantes de distintos departamentos de Estado vinculados a la materia y por auténticos productores. De tal modo, el Banco de la Nación Argentina ejecutará las directivas que se dicten desde dicho consejo utilizando su organización y complementándola con el con-

cimiento que de los problemas del campo caracterizará a éste.

Cabe significar la presencia de auténticos agricultores como integrantes de dicho Consejo, desde que elaborarán por medio de dicho cuerpo superior todas las reglas que han de orientar la colonización del futuro. Ya existe experiencia al respecto, pues con el decreto 7.029, a partir de 1951, se ha constituido un Consejo Coordinador de Colonización con amplias atribuciones de colonizador y supervisor de la obra colonizadora del campo.

Dicho Consejo lo integran varios ministerios y entre ellos se cuenta con la participación directa del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahora, como indico, se complementaría el mismo con la participación de auténticos productores rurales, cuya acción —de más está que yo lo recalque— procurará la solución de los diversos problemas que el campo en su vida diaria plantea, llegándose así a lograr una ejecución de planes que ya tiene honda repercusión y reconocimiento de los productores.

Por otra parte se obliga al Banco a contar permanentemente con un organismo técnico especializado para la aplicación de la ley. Todo ello perfecciona el sistema de aplicación de las normas jurídicas que nos ocupan.

Es mi deseo señalar que existe la aspiración de obtener una agilización en los trámites y formas de trabajo, al iniciarse la consideración de posibilidades en procura de una coordinación de planes regionales de colonización, en lo referente a la órbita que a cada provincia atañe.

Un aspecto importante es el que estipula el artículo 3º en su inciso f) al especificar que se ha de «promover la participación de las cooperativas en el proceso colonizador y especialmente en la redistribución de las tierras». En efecto, se reiteran así las directivas de la 14.184, dándose vida a uno de los preceptos justicialistas que caracterizan con rasgos firmes los lineamientos del segundo Plan Quinquenal.

Es interesante mencionar que en los planes de colonización se observarán principalmente tres factores básicos, a saber: a) Consumo regional y demanda de los mercados nacional e internacional; b) Economía de los transportes, y c) Ecología zonal.

Acerca del particular no está de más señalar que los inmuebles destinados a la colonización son perfectamente estudiados, agotándose en tal sentido todas las medidas destinadas a concretar el éxito del proceso colonizador. Es por ello que se analizan las condiciones ecológicas que signifiquen una eficaz explotación, ajustada a las posibilidades que la zona ofrece, dentro de lo aconsejado por la técnica y también por la experiencia.

Son estudiadas las condiciones extrínsecas e intrínsecas de esos inmuebles, rotación de cul-

tivos, transportes, naturaleza del suelo, lluvias, temperatura y otros factores vinculados estrechamente al desenvolvimiento de la vida rural, de tal forma que los datos obtenidos, con sus correspondientes relaciones, permitirán deducir con bastante aproximación los cultivos óptimos, buenos, regulares, marginales y malos.

La importancia de tal realización surge fácil a la comprensión si analizamos, aun someramente, los beneficios inmediatos que representará para el agro y para el productor, si consideramos entre otros aspectos uno que resalta entre los más interesantes: encauzar la producción del agro en forma disciplinada, jerarquizando la labor del hombre de campo, el que la conforma en un esfuerzo y en una suma de valores y virtudes personales, y concurrentemente lo transforman en el artífice de una finalidad superior y patriótica.

Así el hombre que trabaja y la tierra que brinda su generosa disposición conjugan los lazos que unen espíritu y carne en una comunión que, consciente de su destino, forma parte del puntal más vigoroso de la nacionalidad.

Como consecuencia de los factores antedichos, se ha previsto en el articulado correlativo del presente proyecto la incrementación preferente de explotaciones hortícolas, tamberas y granjeras, a fin de asegurar y mejorar el abastecimiento de alimentos protectores a los centros de consumo del país.

Esta previsión innova en materia colonizadora e impulsa a los particulares —propietarios de inmuebles aptos—, mediante la asistencia oportuna del crédito estatal, a fomentar por sí mismos las producciones del caso, efectivizando uno de los postulados de la producción agraria al practicar el concepto de la función social en la propiedad rural.

Los servicios técnicos que se prestarán así a los colonos en su trabajo: cooperativismo, mecanización agrícola, asesoramiento y otros, en lo referente a la promoción agropecuaria y a los problemas derivados de la alimentación encarados por una concepción unificada, son concretados en dos principios básicos: la tierra para el que la trabaja y su producido para satisfacer la demanda interna y la posible obtención de saldos para ser ubicados fuera de nuestras fronteras.

El éxito de esta empresa de tan honda envergadura y de tan profunda repercusión en la vida nacional requiere la adopción de un sentido de relación entre las leyes de la producción, distribución, circulación y consumo de bienes en el orden social.

Igualmente los factores de ponderación citados han de aplicarse en las zonas de riego, creadas o a crearse mediante el cumplimiento de obras hidráulicas estatales, y especialmente se significa al respecto la orientación hacia zonas de erosión, en base a un ordenamiento tec-

nológico de las unidades de explotación en salvaguardia del patrimonio del suelo.

Las dos zonas referidas que se incluyen, en forma concreta, en los planes de colonización, nos dicen de una orientación de gobierno digna de mención, desde que, juntamente con las finalidades que se detallan en el artículo 6º, apartado II, se evidencia una inteligente previsión en la materia.

Con referencia al precio de la tierra colonizable, a fin de hacer efectiva su valuación, se tendrá en cuenta su valor productivo, relacionado con la valuación fiscal y valores venales promedios para terrenos similares de la zona, dentro de un período de cinco años. De tal modo se llega a una estimación real de valores, colocando los preceptos de la ley acorde con los intereses de las partes afectadas. Por otra parte, no se descuida la estimación de las mejoras, circunstancia que ha merecido especial consideración. En todos los casos la adquisición de las tierras se hará por convenio, licitación o en remate público, desplazándose la compra directa. Destaco, señor presidente, eso del desplazamiento de la compra directa para dar una real efectividad a los principios de honradez y de honestidad en los funcionarios encargados de adquirir las tierras para la colonización. Es decir, que así, sin mayor alharaca, nosotros sentamos principios que, como éste, tienden a asegurar aquello que el señor presidente de la Nación señala constantemente: honradez en los funcionarios públicos. Nosotros lo concretamos en esta ley para impedir los manejos de funcionarios venales en detrimento de la alta función administrativa.

A fin de no dilatar la exposición, es del caso aludir concretamente a los aspectos más sobresalientes que caracterizan la reforma agraria que se impulsa en el proyecto de ley que debatimos.

Así, por ejemplo, se evidencia el respeto estatal por la propiedad rural, desde que la ley no hace distingos en cuanto a superficies para promover la subdivisión de los campos, sino que para ello observa principalmente el trabajo de la tierra, es decir, su explotación.

Este principio está acorde con las directivas del excelentísimo señor presidente y ratifica una política agraria perfectamente definida, promoviendo la entrega de la tierra a los auténticos productores, sin por ello desconocer el derecho de propiedad cuando éste cumple con las producciones que el mercado demanda. Así, por ejemplo, la ley 12.636, del año 1940, establecía la expropiación de campos cuando éstos —aun trabajados racionalmente— concaran con una superficie mayor de 2.000 hectáreas. Esta medida no la aceptamos desde que, conocedores del campo argentino, bien sabemos de la inconveniencia de fijar límites numéricos sobre

superficies de campo sin tener en cuenta la organización productiva que las distingue.

A la comunidad argentina le interesa que la tierra se trabaje con sentido social, es decir, atendiendo las demandas del consumo interno e internacional, y previniéndose la defensa del suelo, como la aplicación de sistemas científicos en las labores agropecuarias y, muy especialmente, la remuneración debida al trabajador que colabora en la empresa, con las ventajas de las previsiones impresas en nuestras leyes sociales.

Ahora bien, si un inmueble, cualquiera sea su magnitud —pequeño o grande—, permanece inculto o visiblemente mal explotado, ha de ser entregado a manos de productores que hagan rendir su tierra como lo exige la sociedad, y, en ese supuesto, queda aclarado que el concepto de latifundio económico desde nuestro punto de vista se define con vistas al trabajo racional de esa tierra y no de su extensión. Pensamiento concreto y real que el señor presidente de la República, en una conferencia realizada en el teatro Colón, destinada a los agrarios del país, puntualizó en forma clara, diciendo que para él el latifundio no son los miles de hectáreas que cada productor o cada propietario puede tener en la República, sino la extensión de tierras no cultivadas o improductivas, con lo que se hacía un daño a la Nación.

Es decir, señor presidente, que, como recién afirmé, también nosotros, así, silenciosamente, apuntamos otro concepto, definiendo lo que queremos como peronistas sobre este problema de la tierra y del latifundio.

He mencionado el respeto de nuestro gobierno por la propiedad rural. Esta circunstancia se ratifica plenamente con la lectura del artículo 15 del proyecto, del cual surge que en todos los casos que sea aconsejable la expropiación de inmuebles para fines de colonización debe acudirse al dictado de leyes especiales, y todo ello precisamente imprimirá tranquilidad al empresario rural, titular del dominio que tenga en adecuada productividad su tierra. Es decir, señor presidente, que aun cuando el Consejo Coordinador vea la necesidad de la adquisición de la tierra, no tendrá facultades de expropiación, es decir, que este título tan hermoso de la propiedad no está en manos de los funcionarios del banco, ni de los ministros ni del propio señor presidente de la república. Si el banco de la Provincia necesita alguna tierra, la expropiación deberá hacerse por ley especial del Congreso argentino, el cual, por voz y voto de sus representantes, dirá cuándo la tierra es expropiable.

Pienso, señor presidente, que el movimiento peronista no puede ofrecer una mayor garantía y manifestar un mayor respeto hacia la propiedad, circunstancia que ensalzo y proclamo con encendido orgullo de argentino y de pero-

nista, porque afirmamos nuevamente el respeto por los demás con el mismo sentimiento con que queremos ser respetados.

Insisto, además, en la incrementación de producciones hortícolas, granjeras y tamberas, según lo estatuyen los artículos 16 y 17 del proyecto, los que innovan con sentido revolucionario en la materia.

Al respecto, lo fundamental a destacar es que, sobre el porcentaje de las superficies que deberán dedicarse a ese tipo de explotaciones, según aptitudes de los predios, superficie de los mismos y proximidad a los mercados de consumo, se brinda oportunidad a los propietarios de inmuebles afectados para que cumplan con los preceptos de la ley dentro de los lapsos que se fijen reglamentariamente, adelantándose que el banco, para facilitar ese cumplimiento, otorgará créditos especiales para la adquisición de todos los elementos necesarios.

De este modo, el propietario no temerá por su campo si lo adecua al tipo de explotación y al tipo de producción que la comunidad demanda, y para que ello sea factible el mismo Estado le facilita los medios y le estipula plazos para el debido cumplimiento de la disposición que comento.

Al margen de lo expuesto, es del caso significar que la reforma proyectada considera a la colonización desde un concepto integral en el sentido de que no sólo interesa al Estado justicialista la entrega de la tierra al productor, sino que ésta ha de ser adicionada con todas aquellas mejoras que eleven el nivel de vida de la población trabajadora y faciliten un rendimiento más económico y racional del suelo agrícola. En una palabra, al productor se le entregarán todos los medios indispensables para una mayor producción y para una mejor vida, circunstancia que favorecerá el arraigo definitivo de su núcleo familiar. Es decir que es éste un concepto revolucionario tendiente a que el hombre de campo no se limite solamente a vivir en su casita o en su rancho y a explotarlo así no más, como quien dice, para «ganarse el puchero». Lo que el Estado desea es que el hombre de campo trabaje y gane lo suficiente para tener un adecuado nivel de vida en los órdenes social y económico.

Otro aspecto fundamental de auténtico sentido revolucionario lo encontramos en el artículo 42 del proyecto, que estipula el precio de venta de las unidades económicas juntamente con su cuota de amortización y tasas de interés en relación directa con el real valor de productividad de la tierra, de tal modo que el productor podrá atender la deuda normalmente y mediante su trabajo habitual. Ello significa que los plazos totales de amortización dependerán de la organización agropecuaria que se proyecte para cada colonia con vistas a la pro-

ductividad de la misma; por lo tanto, no se fija arbitrariamente un número de años para la adquisición de la tierra, sino que esta adquisición dependerá de las posibilidades reales que la tierra brinde mediante el trabajo diario de la familia agricultora.

Asimismo, podrán acortarse los planes de amortización a fin de que el productor obtenga su bien inmueble, mediante la previsión estatuida en el capítulo XIII del proyecto, referente al «Fondo de ahorro».

Una vez lograda la propiedad, su titular queda sujeto a obligaciones para con la sociedad, de tal modo que en el tiempo no se desvirtúe la función social de esa tierra, que el Estado entregará en óptimas condiciones y en bien del trabajador rural y su núcleo familiar.

Al respecto, concurre la medida atinente a la imposibilidad de que se subdividan las unidades económicas proyectadas, manteniéndose por lo tanto el parcelamiento técnico que la ciencia de la colonización obliga, siempre que el banco no dispusiera lo contrario, atento a los adelantos que pudiera presentar la técnica agrícola del futuro.

Las consideraciones que anteceden me llevan a exponer algunos datos aproximados con referencia a la entrega de tierras y la acción crediticia agraria. Desde 1940 a 1946 se adjudicaron 56.000 hectáreas; en los seis años siguientes asciende la entrega total a 800.000 hectáreas.

A partir de entonces, y hasta el presente, se han adjudicado y están en ofrecimiento 1.132 mil hectáreas, encontrándose en proceso de habilitación 210 mil, de las cuales 5.500 pertenecen a zonas de riego.

Así también el crédito agrario asciende de 400 millones de pesos en 1945, a 4.700 millones en 1953, en una planificación dedicada en modo especial a atender los objetivos que comprenden a la propiedad, distribución y uso de la tierra.

En lo que respecta al régimen financiero de la ley, es fundamental aludir al artículo 66, a efectos de señalar que en la práctica, a partir del segundo Plan Quinquenal y para cada año de dicho plan, el Ministerio de Finanzas ha autorizado al Banco de la Nación Argentina la utilización de 200 millones de pesos anuales, para su acción colonizadora, es decir, que habrá mil millones para el quinquenio.

Otra modalidad del proyecto de ley que es conveniente relatar, se vincula a la colonización coordinada con las provincias y territorios nacionales, siempre que exista acogimiento al régimen del presente proyecto. Por lo tanto, las provincias podrán aplicar planes propios de colonización atento a sus leyes y recursos y además planes de colonización nacional, según los preceptos de este proyecto con los recursos financieros del Banco de la Nación Argentina. En cuanto a la colonización privada, es importante destacar que en el supuesto de que arrendata-

rios de inmuebles se transformen, por imperio de la ley de arrendamientos y aparcerías rurales y con asistencia del crédito oficial, en propietarios, quedarán sujetos a las obligaciones que impone esta ley.

Además, en la colonización privada sobre campos libres de ocupantes, el banco auspiciará la misma adquiriendo las tierras en forma global y luego entregándolas a los auténticos productores en unidades económicas. Con esta medida se tiende a una colonización directa sin intermediarios, abaratando desde luego, los costos.

Por último, en las disposiciones generales se encuentra una medida de orientación técnica que exige el agro argentino para una acertada producción. Para ello, y observando las necesidades de la vida social del agro, se prevé constituir consejos agrarios locales con la participación directa de los propios adjudicatarios. Esta medida armoniza con la que se estipula en el artículo 2º del proyecto, de tal modo que los productores intervendrán en la elaboración de los planes de colonización y en su ejecución y contralor posterior, es decir, estarán presentes con voz y voto en las distintas y cada una de las faces que caracterizan el problema que estamos considerando.

No deseo dejar de mencionar la gravitación del problema migratorio rural dentro del marco de este proyecto, el que prevé un porcentaje de hasta el veinticinco por ciento de los lotes a adjudicar a favor de familias especializadas en la agricultura y que actualmente provocan excesos de población en Europa.

El fomento de la inmigración a que hace referencia el artículo 3º del proyecto y que viene efectuando el peronismo a partir de 1946, significará concretar una posición creada por el vuelco sufrido en la situación que se le planteaba al inmigrante que llegaba al país en busca de bienestar y trabajo que no tenía en el Viejo Mundo, pero que al llegar se encontraba con que no hallaba amparo de leyes elementales para subsistir.

Se produce así una valoración del inmigrante teniendo en cuenta su capacidad de trabajo, buscándose con preferencia técnicos y artesanos que le eran de imperiosa necesidad y utilidad al país, asegurándose su destino posterior y con condiciones de trabajo óptimas. Luego se facilitó aun más la corriente migratoria, permitiendo el libre ingreso, simplificando los trámites y exigiendo como único documento la cédula de identidad, además de los certificados de salud y de trabajo y dando trámite preferencial para embarcar.

En el segundo Plan Quinquenal se ha tenido en cuenta, en forma muy particular, la inmigración como uno de los medios de propender a la colonización del agro argentino, y así tenemos que por el artículo 3º del proyecto que estamos tratando se determina que el Banco de la Nación, con aprobación del Poder Ejecutivo, podrá

celebrar convenios con grupos de familias de agricultores residentes en el extranjero para radicarlos en colonias agrícolas.

Lo mismo podrá establecer relaciones con instituciones internacionales de las que sea signatario el país con el objeto de radicar a productores rurales inmigrantes en zonas de colonización.

Deseo señalar con referencia a este punto, que hace tres o cuatro días la información periodística nos ha hecho saber que, de conformidad al plan aprobado en Ginebra, a raíz de las conversaciones sostenidas por distintos países acerca de planes de colonización celebradas en ocasión de la Conferencia Intergubernamental sobre Inmigración Europea, vendrán a nuestra República 22.270 personas de diversa procedencia.

En nuestra Nación, señor presidente, con casi 3 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 18 millones, tenemos un promedio de 6 habitantes por kilómetro, lo que representa casi la mitad para el campo argentino, si tenemos en cuenta la concentración de la población en las grandes ciudades y el Gran Buenos Aires; por ello es tarea urgente que se ha impuesto al gobierno en poblarlo recurriendo a la inmigración.

La afluencia de trabajadores extranjeros con sus familias constituye uno de los medios de que disponen los países nuevos para llegar a esa finalidad. Es sabido que los primeros gobiernos del país fomentaron, dentro de sus posibilidades, esas corrientes inmigratorias, pero las luchas civiles y diferentes factores de orden interno establecieron un paréntesis en esas actividades o bien las redujeron al mínimo; con el advenimiento del gobierno peronista se proyecta el problema en soluciones amplias, dando acceso a los trabajadores extranjeros, que con sus familias están poblando el campo argentino, en colaboración afectiva y estrecha con los nacidos en esta tierra.

Acorde con el pensamiento del excelentísimo señor presidente, puesto en ejecución en la reforma agraria que se propicia por este proyecto de ley, e interpretando, como ya especificué, que la reforma pacífica es la más viable para obtener los fines que se persiguen, se ha estructurado el articulado facilitando al productor los medios para encuadrarse en sus disposiciones, a la vez que posibilita al arrendatario su transformación en propietario de la tierra que cultiva.

Con el concepto de que la grandeza y potencia de la Nación se cimentan en sus campañas, y para que cada vez sea más efectivo el sueño de nuestro presidente, que lo compartimos plenamente, es menester fomentar y acrecentar el agro argentino, no sólo con refinamiento de hacienda, sino creando ciudades y pueblos agrarios que sientan, vivan y luchen arraigados por intereses propios y también por el deseo de servir intereses colectivos.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, contraalmirante (R.) Alberto Teisaire.

Hace unos días, en la conferencia de Río de Janeiro, la Subcomisión de Desarrollo Económico aprobó por unanimidad un proyecto presentado por la delegación argentina que concuerda en un todo con el procedimiento usado en el país en lo que respecta a la colonización e inmigración, y que dice así: «Que los países americanos que necesitan inmigraciones para su desarrollo adopten medidas para intensificarlas, especialmente la de personal técnico en la agricultura e industria, y que simplifiquen en lo posible los trámites administrativos para la admisión de inmigrantes.»

Según las ponencias argentinas en recientes congresos internacionales sobre la materia, se tratará preferentemente al respecto de la radiación de corrientes inmigratorias rurales en nuestro país para aquellos cultivos que evidencien sensible demanda en el mercado interno e internacional y que no provoquen competencia con la mano de obra nativa.

Con esto, es palpable que seguimos con la política de atracción a las corrientes de la vieja Europa, que siguen mirando hacia esta parte del mundo como el rincón ideal donde el hombre puede encontrar paz, felicidad y trabajo.

Desde luego que seguimos alimentando para ello los mismos sentimientos solidarios y los mismos impulsos fraternos que nos hacen sentir hermanos de la humanidad; queremos seguir siendo la tierra de promisión, pero dentro de un orden racional que haga efectiva una política de equilibrio a intereses recíprocos con vistas a asegurar un resultado positivo a los propósitos gubernativos.

Nuestro país es de paz y bienaventuranza para todos los hombres de buena voluntad y sensible al llamado que allende nuestras fronteras requiere la solución de problemas sociales que aquejan a hombres que necesitan acogida y amparo, los cuales serán los inmediatos beneficiarios de la rectora conducta que nos anima y cuyo afán de realización se basa, principalmente, en el hondo sentido de solidaridad que es nuestro norte.

Constituimos incuestionablemente la tierra del futuro, y las puertas de la República siguen abiertas a todos los aires del mundo, pero queremos que quienes lleguen a la conquista de ese futuro lo hagan dentro de un programa trazado por la República en un orden de ideas y de métodos que a todos obligue y a todos beneficie; queremos que las corrientes inmigratorias lleguen al país dentro de ese orden que establecen los planes respectivos. Deseo íntimo, por otra parte, es el que proclamamos que al venir quieran esta tierra sin olvidar a la madre, y así

como exigimos que las ideas caducas que pudieran traernos para disociarnos queden lejos de estos cielos serenos de paz, ambicionamos que las nuevas células que se incorporen a la vida de la Nación lo hagan con el vigor y la honradez que aumenten el vigor y la honradez de la sangre nuestra, bullente como nunca en una lucha ardorosa y tremenda por salvar el alma de la nacionalidad y asegurar la grandeza del país.

Por ser así, tal vez algún día fuere dable contemplar el visionario sueño de los cien millones, haciendo correr por las arterias de la República el espíritu vivificador de trabajos, amores y auehos, y más maravilloso será el espectáculo de las banderas todas de la tierra enarboladas por cada brazo originario en elocuente y sincero homenaje a la bandera que los cobijó y a un pueblo que los trajo y los acercó a su corazón.

Señor presidente: la comisión considera que la aprobación de este proyecto permitirá cumplir con los postulados primeros y básicos de la revolución justicialista, asegurando al auténtico hombre de campo su bienestar económico y su seguridad social y sumir en el olvido lo que otrora significara la explotación latifundista.

Al estudiarlo, en su lectura, ha realizado un examen exhaustivo en la materia, recabando antecedentes e informes, y contó con la valiosa colaboración del señor gerente de colonización del Banco de la Nación, ingeniero Roberto Thierry. A pesar de ello hemos creído oportuno y conveniente, para un mejor ordenamiento en la concepción de las disposiciones del mismo, introducirle algunas reformas que si bien no modifican el articulado hacen a su sentido práctico, a su claridad, para concretar mejor los propósitos que animan a éste.

Así, en el artículo 4º, se suprime la primera parte del párrafo por entender que al decir «en toda adquisición de tierra agraria» ya incluye implícitamente la elaboración de los planes que establece la ley.

En el inciso g) del artículo 6º se suprime la obligatoriedad de exigir al nuevo colono «la familia constituida», de tal modo que sea viable que el hijo de un colono pueda presentarse a gozar del beneficio de adjudicación con vista a asegurar su propio porvenir y tener el medio seguro y efectivo a la vez de constituir una familia.

La comisión estima prudente la supresión de la segunda parte del artículo 19, ya que ello está contenido en la ley de expropiación vigente, y su alcance fué ampliamente debatido en oportunidad de su sanción por el Congreso.

El párrafo a que se refiere el proyecto del Poder Ejecutivo que consideramos, al atribuir que el valor total de los perjuicios en ningún caso excederá del 20 por ciento de la tierra y

sus mejoras, introduce, a nuestro juicio, una modificación al artículo 11 de la ley de expropiaciones, que estimamos innecesaria.

En el inciso e) del artículo 29 se agrega también que los aspirantes a tierras no padezcan de defectos físicos que los incapaciten para el trabajo rural, ya que es requisito primordial, para optar a la parcela, que la trabaje el interesado en condiciones óptimas de eficiencia.

Al inciso e) del artículo 30 se le ha suprimido la palabra «capital», por entender que el Estado, por intermedio del Banco de la Nación Argentina, otorga créditos amplios y múltiples a los poseedores de tierras que las adquieran por intermedio de las prescripciones de esta ley, y, por lo tanto, se hace injusta la obligatoriedad de poseer un capital, ya que, en realidad, el Estado justicialista considera con espíritu comprensivo al que no lo posee o lo posee menos.

En el artículo 37 del proyecto se cambia la palabra «agricultores» por «agraria», ya que una determina la persona que labra o cultiva la tierra y la otra es relativa al campo, es decir, con una más amplia concepción del vocablo.

Y por último, en el artículo 82, se ha agregado que las disposiciones del artículo 64 de la ley 12.636, juntamente con los artículos 61, 62 y 63, regirán para todos los adjudicatarios que no hubieren recibido el título de propiedad a la fecha de promulgación de la presente ley.

Señor presidente: he tratado de ser en mi informe lo más objetivo posible. Es evidente que los señores senadores que me van a seguir en el uso de la palabra harán ampliaciones a mi exposición y fijarán, desde luego, el espíritu con que nosotros hemos considerado este proyecto de ley. Confieso que en su tratamiento hemos puesto mucho cariño y mucha pasión de argentinos, convencidos de las finalidades de esta ley excepcional que tiene como esencia la inquietud vitalizadora que surge de los principios de la naciente Doctrina Nacional, que arquitectura en sus sabias disposiciones todo un instrumento de profundo contenido revolucionario y apunta, con su objetivo, a afirmar el significado extraordinariamente trascendente de reformas agrarias como postura y alegato de las ambiciones del movimiento, de seguir realizando con la Constitución y la ley la sagrada felicidad de los argentinos.

Pensamos que el afán renovador y creador del movimiento justicialista, al traernos esta ley, va a hacer posible la vigencia de principios que, lo percibo ya, alborean en el cielo de la patria con tintes de amaneceres, anunciando un nuevo derecho, una nueva forma y, lo que interesa, una realidad más de las realidades de Perón.

Y seguimos la marcha seguros hacia el porvenir, percibiendo que lo realizado es el mejor estímulo de lo que sentimos para seguir honrando y enaltecendo, con la amplitud y fuerza

que merece, esta bendita tierra a la cual no nos cansaremos de señalarla como el asiento de un pueblo vigoroso y noble que logró, en jornadas sin pausas y con urgencias de cumbre, la gloria augusta de los verdaderos triunfadores, y que para bien de él seguiremos en la ardorosa faena, para afirmar sobre esa cima la grandeza inmarcesible de la Nación, estampada ya con soplos de eternidad en la majestuosa y sublime serenidad del blanco y celeste emblema de la patria.

En esta hora del portentoso trajinar de la República, en que se agita el alma selecta y pura de su nacionalidad colocada en la altura sin mengua de un maravilloso presente, es digno verla cantar sin retaceos el himno del visio-nado y seguro porvenir.

En pos de él seguiremos con la firme voluntad de entregar sin desmayo nuestros afanes a la noble tarea del acrecentamiento del bien común de la Nación y demostrando con inculdicable espíritu de lucha que nos alientan la razón, la verdad y la justicia de nuestras intenciones.

Con estos sentimientos yo termino mis palabras, seguro de que el Honorable Senado de la Nación, en enhiesta y constante actitud de lealtad y solidaridad, votará esta ley, que tiene para mí, en su soplo de aliento revolucionario, el mejor y más poderoso de los argumentos, para hacerlo con serena tranquilidad de patriotas y ardiente fe de peronistas.

Esta mañana, señor presidente, para mí, con la sanción de este proyecto de ley, la bandera tiene brillazones de campo.

Nada más. (*Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Pierangeli Vera. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Pierangeli Vera. — Señor presidente: no obstante la fiebre de la industria que está ganando a todos los países del mundo, a medida que aumentan las necesidades alimentarias de los pueblos, que sufren ahora las consecuencias del aumento de su población, se está imponiendo el concepto de que en este mundo la industria principal es la que nace de la tierra.

El concepto de que la industria básica sobre la cual deben asentar todas las aspiraciones en todo sentido es la tierra, y de que todo podría derrumbarse cuando esa base no ha sido sólidamente cimentada, es una realidad que ya no es posible discutir cuando se está escribiendo diariamente sendos capítulos sobre la geografía del hambre.

Señor presidente: está en debate un proyecto de singularísima importancia por su formidable envergadura de vigor netamente revolucionario, por su elevada significación doctrinaria, por los incalculables beneficios que aportará a la economía nacional como saludable efecto de esa fuerza propulsora orientada en el sentido del

progreso material y de la justicia social en que el general Perón ha cimentado las bases inmuebles de la Nueva Argentina.

La Constitución justicialista, cuando estatuye que incumbe al Estado fiscalizar la distribución y utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, fija el norte que invariablemente han de seguir los hombres de gobierno en quienes los trabajadores de la tierra han confiado su destino.

El Poder Ejecutivo, manteniendo invariable su conducta en lo que atañe a su acción renovadora, entiende que la ley 12.636 ha perdido actualidad y sostiene que es imprescindible dotar de mayor vigor, eficiencia y sentido humano a las normas jurídicas vigentes en materia de colonización, para ponerlas a tono con las nuevas concepciones de la Doctrina Justicialista y las previsiones del segundo Plan Quinquenal.

La ley 12.636 ha sido sancionada en circunstancias en que, debido a una deficiente administración de los bienes de la Nación, todo hacía presumir la vecindad de situaciones difíciles, que se pretendía prevenir o disimular, adoptando medidas que, si bien podían suponerse bien inspiradas, no eran el fruto de un acabado estudio ni de una sólida experiencia adquirida con la observación directa de los hechos sobre el vasto escenario del campo, donde se perpetuaban las causas que venían manifestándose cada vez más ostensiblemente con sus funestos efectos, pese que a través del falso cristal del verbalismo electoralista se hacía ver a los incautos esclavos de la tierra ajena el renovado panorama de un futuro cada vez más esquivo, cada vez más lejano.

Veamos, señor presidente, lo que importa la función social de la tierra: «Señoría es poder que ome ha en su cosa de facer della o en ella lo que quisiere, según Dios e según fuero», sostenía allá por el siglo XIII el muy sabio rey Alfonso.

El monarca fué un creyente y cultivó, además, el respeto a la ley. Fué sincero cuando aspiraba a conducir a su pueblo por la senda del bien, asegurándole el pleno goce de sus derechos. Fué un hábil gobernante y supo sacar provecho de los efectos saludables de la moral y de la libertad en beneficio de la paz interior de su reino, no muy poblado ni escaso de recursos naturales.

Pero es que las poblaciones de reducida densidad se ubicaban cómodamente en determinadas comarcas, y la tierra era abundante y productiva, rebasando las necesidades de los pueblos e incluso la voracidad de las ambiciones, fué fuente inalterable de paz y bienestar y ambiente propicio al libre albedrío. Es entonces cuando se hace posible respirar, a pulmón lleno, en el campo abierto de las libertades

absolutas; es entonces cuando se puede proclamar, a tambor batiente, que «señoría es poder que ome ha en su cosa de facer della o en ella lo que quisiere...». El concepto así, breve, claro y sencillo, traduce con una elocuencia incomparable lo que la humanidad hubiera ansiado conservar hasta la eternidad, si poderosos motivos, que hace ya mucho tiempo han adquirido las proporciones de los problemas económicos sociales universales extremadamente graves, no estuvieran reclamando, imperiosamente, la prevalencia de las normas morales sobre el derecho de propiedad absoluta.

En estos años tan difíciles en que la humanidad exige mayores sacrificios para asegurarse el sustento, no es posible hacer de la tierra, y con ella y con el desdichado que la trabaja, lo que se quisiere, agravando a Dios y a la sociedad.

Si no se ha sabido prevenir esas situaciones cuando recién asomaban con funestos presagios, y que hoy son la realidad de medio siglo de pavorosas tragedias, que no son sino la consecuencia del sufrimiento de los pueblos, obra de personajes siniestros que han hecho de la razón humana, dentro y fuera de los Estados, el instrumento de la explotación y del pillaje, hoy será necesario reparar los daños causados a esos pueblos desposeídos.

Con las restricciones impuestas por las nuevas normas jurídicas orientadas en el sentido social, ha llegado la era de la verdadera justicia. El derecho de propiedad no puede eximir a la misma de sus obligaciones para con el interés general, sin grave perjuicio de la sociedad a quien se destinan los bienes naturales.

La función social de la tierra viene siendo defendida, a través de las edades, desde los imperios de Oriente hasta nuestros días, en que es razón firme en la conciencia nacional, desde el debate parlamentario y los congresos nacionales de derecho, hasta en el libro, en la prensa y en la calle.

Véase, si no, señor presidente, cómo cuando la civilización avanza con pasos inseguros tropieza con sus propios errores y se ve precisada a rever sus normas, concebidas sin el auspicio de las instituciones populares.

Hace justamente treinta años el profesor Lafaille manifestaba ante el consejo directivo de la Facultad de Derecho de esta capital: «Medio siglo de distancia y las transformaciones graves que la humanidad experimentó en los últimos tiempos han venido a intensificar aquellas deficiencias originarias de la ley. Pese a la extensión territorial y al corto número de habitantes, la propiedad —así concebida y reglamentada— es ya una rémora para el desenvolvimiento del país. Se impone, pues, que las clases dirigentes abandonen la idea de un dominio egoísta, sin obligaciones —antisocial

por excelencia—, capaz tan sólo de fomentar el odio colectivo y de suministrar cómodos argumentos a los agitadores.»

Como consecuencia de esa saludable reacción, se afirma día a día la nueva conciencia agraria universal y el concepto de que la propiedad, sin excepciones derivadas de su mayor o menor extensión, debe aceptar las obligaciones que reclama la comunidad —está de más aclarar que me refiero al sentido natural del vocablo y no al sentido doctrinario comunista—, para que la tierra cumpla la función social que le es propia.

Quien escudriña en la historia de los pueblos de Oriente y Occidente la evolución de la propiedad rural y la vida de las poblaciones agrícolas y pastoriles, descubre que desde los primeros instantes les estaba reservado un trágico destino.

La riqueza y el poder, la miseria y la impotencia, han escrito el drama eterno de su odiosa e irremediable coexistencia.

No obstante, y cuando los relatos de la historia universal nos llevan en angustiosa peregrinación por todos los ámbitos de la tierra, nos señalan algunos fugaces asomos de justicia en episodios de muy lejanos tiempos, que hacen más inconcebibles situaciones absurdas en el mundo civilizado del presente. Episodios en la obscuridad de épocas remotas, descubren al hombre orientando sus primeras luces en el sentido del bien.

Son hechos altamente significativos, señor presidente, que nos ilustran sobre situaciones del pasado y del presente, que muestran una asombrosa similitud en sus orígenes y en su evolución, porque se descubren en ellos las mismas causas e idénticos efectos que han provocado reacciones semejantes y han encontrado soluciones que se avenían perfectamente con la verdadera justicia social. Soluciones que, tras un somero análisis comparativo, dejarían mal parado a más de uno de los ensayos extremistas del presente.

Sucedió en los siglos que precedieron al nacimiento de la civilización en la antigua Grecia. Los nobles que reinaban en la ciudad con el apoyo de los dioses, dominaban a las poblaciones rurales, relegando a los humildes que los enriquecieron con su trabajo a la lastimosa condición de los desheredados. Sometidos al rigor de sus crueldades, la miseria moral y física ensombreció la vida de esos pueblos.

No bien había relatado Hesíodo su desdichada existencia en sus poemas, cuando una inesperada reacción del sentimiento humano hace el milagro de su redención. De la nobleza misma surge la reacción de la Grecia antigua, que nos dió el primer ejemplo de reforma agraria violenta. La administración de la tierra se orientó,

y según la tendencia natural de la inteligencia a discernir lo que real o aparentemente estaba bien o mal.

Este sistema de gobierno conducido según el sentimiento individual es aun frecuente en algunos países. En cambio, la obra de Perón y de Eva Perón fué el fruto de su genio bien hechos, pero también el resultado del orden, de la organización y de las constantes consultas a las ciencias, la experiencia y las aspiraciones de su pueblo.

En el caso histórico que nos ocupa, el gobernante improvisado en tales circunstancias, sin temer a los dioses aristócratas ni a las leyes parciales que hasta entonces protegían a los nobles, disponía el reparto de sus bienes entre los esclavos liberados y la igualdad de clases.

Los nuevos propietarios, pastores y labriegos estaban obligados a permanecer en sus predios, dedicados a sus tareas. Hubo entonces allí, justicia social, abolición de privilegios y obligaciones de parte del hombre de campo. Encontramos aquí un dato histórico interesante que ilustra las últimas reformas agrarias; se refiere a la necesidad de que el hombre de campo debe permanecer en sus predios. Todo esto tiende a evitar la tendencia, hoy tan corriente, del abandono de los campos de cultivo para trasladarse a las ciudades. Se ve entonces que en la antigua Grecia, un pueblo montañoso que en esa época padecía el inconveniente de comunicaciones escasas y sumamente difíciles, el hombre de campo trataba con una sola solución de evitar la molestia de sus viajes ubicándose en la ciudad porque allí encontraba un más alto nivel de vida, una mayor actividad social y se producía, al parecer entonces, 35 siglos ha, el problema que hoy es preocupación de los gobiernos y de las leyes agrarias: la emigración hacia las ciudades. El resultado no se hizo esperar: florecieron aquéllas y en el campo el bienestar y la abundancia; cobraron nuevos bríos las industrias y el comercio, la paz reinó en la tierra de los helenos.

El ejemplo estaba dado pero sólo para ocupar un lugar en la historia. Por los siglos de los siglos, pese a las conquistas espirituales que hicieron la era luminosa de la misma Grecia, cuna de la razón humana en que se nutre el concepto de patria y de libertad; pese a la moral cristiana, que apenas si pudo llegar al hombre, las pasiones incontroladas proliferaron en la medida de la evolución de los pueblos.

Ni aun cuando la tierra ha estado en manos de sus legítimos propietarios, ha podido eludir la codicia ajena.

Desde que se tiene noticias de la organización de las naciones se sabe de las luchas por

el dominio de la tierra. En el orden internacional ha sido siempre codiciado botín de guerra o bien el resultado de conquistas sin mayores glorias militares, pero perfectamente concebidas para un fin determinado.

Sea cual fuere la causa de las anexiones territoriales, el invasor introduce invariablemente en el régimen de la tierra de los países subyugados profundas modificaciones en las que el hombre pierde, con su propiedad, toda influencia económica y política en beneficio del opresor, que logra así afianzar sus posiciones en el gobierno y en el dominio de la tierra. Estas incursiones a través de acontecimientos que aparentemente no nos interesan, no tiene otro objeto que el de demostrar cómo para consumir esos despojos que antes exigían el procedimiento escandaloso de una invasión armada, a veces fracasada como en el caso de la invasiones inglesas, el ingenio humano sirviendo a esas pasiones incontroladas descubre que, sin mayores sacrificios, es posible llegar a los mismos resultados practicando solapadamente el monopolio con la complicidad de los gobiernos de las naciones explotadas, gobiernos subordinados al poder irresistible del capitalismo que hace el juego maquiavélico de los trusts, de los carteles y de los holdings. Esos monopolios y esos gobiernos subordinados, de larga y funesta actuación, son los que nos han conducido a la difícil situación en que hemos vivido, hasta alcanzar el punto crítico que provocó la revolución de 1943.

Pero ¿cómo han podido venir esos tiempos difíciles cuando la civilización había ganado alturas inconcebibles, cuando el progreso material no hallaba obstáculos que no le fuera posible superar?

¿Qué influencias perniciosas podían haberse infiltrado en la cultura superior del hombre, que fueran capaces de desviarlo de la línea recta que le habían venido señalando las conquistas espirituales?

Esas lamentables desviaciones que afectan la ética individual han aparecido tras el renacimiento de las letras y las artes que estimulan los primeros éxitos científicotécnicos al análisis y al cálculo, en detrimento de los avances espirituales, porque no tardaron las fuerzas intelectuales en aplicarse al progreso general lanzando la actividad individual en pos de los éxitos materiales.

Más tarde, la revolución industrial usa a su manera las normas generosas de la revolución jurídica y desata las ansias irrefrenables del liberalismo que ha de engendrar las tiranías económicas.

Si el libre cambio recomendado por los economistas para facilitar la distribución equitativa del trabajo y las riquezas en todo el universo no hubiera sido traicionado por las dictaduras económicas y el capitalismo insaciable no se

hubiera ensañado con las jóvenes naciones de latinoamérica, otro habría sido el destino de estos pueblos subyugados durante y después de la época colonial.

Ingenualmente habíamos llegado a suponer que ya no era posible sumar un mayor número de calamidades a las que veníamos soportándole a Fernando VII en los últimos años de la colonia, con el agregado de los continuos sobresaltos en que nos tenían los repetidos intentos de invasión armada, porque siempre estas tierras de promisoras riquezas naturales han estado tentando las zarpas imperiales. Ya no esperábamos nuevas calamidades —decía— y tanto menos por cuanto luego vino la ansiada liberación y con ella los postulados de Mayo con sus serias advertencias sobre los riesgos de posibles apropiaciones y claros delineamientos de una equitativa distribución de la tierra.

¡Cuán formidablemente esos postulados de Mayo estimularon la fe y la esperanza en el porvenir de esta «nueva y gloriosa Nación»! Posteriores razonamientos y tanteos vacilantes restaron vigor a las demostraciones fundadas por los patriotas de la primera hora. La desilusión vino a sumarse a las penurias del pasado y al poco andar de malogrados intentos de colonización, el campo cae a consecuencia de lamentables errores de gobierno en manos de minorías privilegiadas que por muchos años han de mantener su posición inmovible en el poder y el dominio de bienes y rentas excesivas.

Sería demasiado complicado y largo exponer la tarea legislativa cumplida durante 130 años, en que el problema agrario viene asido a la suerte de la Nación. Rivadavia, acosado por compromisos financieros, intenta aplicar principios enfiteúticos; Rosas paga sus campañas al desierto con tierras repartidas sin medida. Los constituyentes del 53 ven en la tierra una segura fuente de recursos, capaz de enriquecer el Tesoro nacional mientras se intenta su colonización. Avellaneda acuerda la tierra con un criterio casi exclusivamente geométrico y su segundo intento de colonización que, no obstante sus serias omisiones, traduce una sana intención en su política agraria, cae luego bajo influencias políticas que todo lo corrompen y se instala con caracteres de desastre la más completa desorganización administrativa rural que ha de necesitar, para lograr un alivio, el auxilio de nuevas instituciones que comenzaron a aplicar en forma desordenada los primeros conocimientos agrológicos, introducidos de otros países que habían avanzado más precipitadamente en la solución de sus problemas agrarios.

Casi todo el régimen de la tierra iba tomando una orientación antisocial, porque con el debilitamiento de los valores morales no podía esperarse otra cosa que las mismas consecuencias que colocaron a muchos países del mundo ante

el riesgo de reacciones violentas que los obligaron a introducir profundas reformas en sus organizaciones agrarias refidas con las instituciones populares.

Por eso traigo aquí, señor presidente, estos hechos distanciados algunos en el tiempo y en el espacio; pero es que allí radica precisamente la causa de estos problemas sociales que nos traen estas modernas tiranías económicas que han llegado a su apogeo a esta altura de la vida de los pueblos y que son a su vez la fuente artificial de otros lamentables errores que se ha dado en llamar normas doctrinarias comunistas y que, en realidad, no son otra cosa que nuevas calamidades, que con todas las características del capitalismo estatal traducen la abolición de las libertades individuales. Fórmulas antihumanas que se han ubicado en el otro extremo, aun más detestable, de las dictaduras políticas, porque las prácticas extremistas mientras hacen la desgracia de este mundo dominado por el talento del hombre al servicio de lo material, ponen claramente en evidencia que han sido estériles 20 siglos de prédica constante; 20 siglos al cabo de los cuales la humanidad naufraga en un mar de egoísmos y de sangre.

Nuestro país, inicualemente explotado, sufrió en mayor grado en su clase trabajadora los efectos de la evasión del fruto de su trabajo por las vías de la absorción foránea, concatenado con la voracidad de los terratenientes, que a su vez se adjudicaban la mayor parte en la distribución de las riquezas.

Tal era el mundo civilizado del presente y el estado institucional de nuestro país, cuando surgieron con la Nueva Argentina de Perón los principios de transcendencia universal: independencia económica, unidad nacional, justicia social y soberanía política; objetivos primordiales de la tercera posición, que tarde o temprano tendrán que adoptar los pueblos amantes de la justicia y de la paz.

Se sostiene por ahí, sin fundamento, que las poblaciones rurales jamás han reclamado una ley agraria porque la perpetuación de la injusticia y su impotencia para imponer sus derechos las habían vuelto escépticas. ¡No! Es que el pueblo argentino, en el pasado había encontrado su guía en el estoicismo. Daba espontáneamente su asentimiento a toda decisión, sean cuales fueran sus efectos. Una moral colectiva frenaba cualquier impulso. Se avenían con los sacrificios de su libertad. Despreciaban los daños intencionales o involuntarios. Toleraban su explotación. En un país poblado en toda su inmensidad, de variados y abundantes recursos naturales, jamás el pueblo se ha lamentado por haber malogrado largos años de su existencia. Ha vivido en el desorden, tropezando a cada paso con las asperezas de una desigualdad que no ha buscado remediar, porque ya venía todo

subordinado a las formas rutinarias de una evolución casi espontánea, como si todo obedeciera a una ley natural que aquí, como en otros países subyugados, se hubiese difundido en la medida de los avances de esta civilización que maduró con tanta premura los frutos de la imperfección humana, disponiendo las cosas de modo que unos, los más, con sus afanes y sacrificios deban asegurar el bienestar de unos pocos.

«Conocemos la importancia social e individual del renunciamento» —escribe Carrel—. «Las grandes naciones han honrado siempre por encima de todos los otros hombres, a los que dieron vida a su patria. El concepto de sacrificio, de su necesidad social absoluta, debe ser introducido en el espíritu del hombre moderno.»

Nosotros también honramos a las generaciones del pasado y del presente, a los que han caído y a los que han de caer todavía sobre esta tierra en que se afirma la grandeza de la patria, porque a pesar de sus desventuras, a pesar de los privilegios, a pesar de los gobiernos y muchas veces cuando han faltado los favores del cielo, el hombre del campo ha logrado marcar los surcos del progreso material, estabilizar sus bases, prohiar nuevas fuentes de riquezas y hasta de una manera indirecta, facilitar las conquistas espirituales que enriquecieron el acervo cultural de la Nación, fuente de inagotables satisfacciones y de legítimo orgullo, porque nuestros antepasados, como nosotros mismos, no han vivido para servir exclusivamente a las ambiciones materiales que han mercantilizado a otros pueblos o a otras clases sociales, hoy totalmente absorbidos por los problemas económicos que los vuelven avaros, tercos e insensibles al dolor humano.

Es que la humanidad progresa enormemente en el sentido material, mientras descuida los valores morales. El sacrificio del hombre de trabajo es indispensable en la medida de lo estrictamente necesario, pero no en el grado de la inicua explotación del hombre que trabaja la tierra por el hombre que adquirió su dominio.

De la simple lectura del proyecto se recoge la impresión de una obra acabada de cabal sentido práctico, y cuando se ha concluido el análisis de sus componentes se tiene ya la firme convicción de que toda legítima aspiración ha sido contemplada, que ha sido concebido bajo los auspicios de un elevado espíritu de justicia. Se advierte en él verdadero afán de superación cuando al recurrir a las conquistas del hombre en el campo de la ciencia agronómica y a las ventajas de la técnica, se propone auxiliar al trabajo llevándole la seguridad de un mayor rendimiento en las tareas rurales.

Todo lo que es posible poner a contribución del éxito en la actividad de los elementos aplicados al proceso productivo, ha sido previsto con exacta noción de cálculo en el sentido de la

equidad para garantizar la función distributiva, abolir la influencia de los agentes perniciosos que determinaron el desequilibrio existente y armonizar los factores discordantes como supremo recurso para cimentar la grandeza del futuro sobre las ruinas de un pasado de injusticias y miserias.

El proyecto que tratamos aspira a establecer una perfecta armonía de conjunto de lo natural y de lo humano, en la que la naturaleza aporta sus elementos insustituibles, y el hombre, los recursos de su energía mental y física para que con la nueva estructura logren el bienestar y el progreso, tomados de la mano, las bondades de la tierra hospitalaria y noble y las virtudes humanas; la luz vivificadora del sol y la luz de la verdad en las leyes, la prodigalidad del suelo, la voluntad y la ciencia del hombre, la claridad del agua y la pureza de los fines.

Es que el proyecto reproduce con una fidelidad absoluta las normas dictadas por el general Perón para introducir orden en la aplicación de los elementos útiles como condición indispensable para aspirar a los beneficios de una perfecta organización, en este caso, de las actividades rurales.

Estimamos así que el mensaje y el proyecto de ley del Poder Ejecutivo vienen refirmando su profundo sentido humano que en íntima conjunción con el necesario sentido práctico hará del instrumento legal el más fiel intérprete de un anhelo colectivo, cuya positiva significación se halla íntimamente ligada a la función social de la tierra, a la necesidad de la cooperación científica y al apoyo financiero que traducen las normas proyectadas en su intención de intensificar el rendimiento en beneficio de la comunidad.

Vamos a analizar el articulado del proyecto en consideración. Se prefiere utilizar a manera de enunciación de objetos y propósitos los conceptos de la Constitución Nacional y los reiteradamente expresados por el excelentísimo señor presidente de la Nación, que definen mejor el pensamiento de la política agraria y que forman parte de la Doctrina Nacional adoptada por el pueblo argentino, como lo expresa el artículo 3º de la ley 14.184 del segundo Plan Quinquenal.

El artículo 1º se refiere al interés de la comunidad en facilitar a los trabajadores agrarios la posibilidad de convertirse en propietarios de la tierra que cultivan.

He de traer una vez más la siempre recordada frase de Young, debido especialmente a que los economistas de nuestros días tratan de desvirtuar su sentido y de restarle importancia: «Dadle a un agricultor un erial en propiedad y lo convertirá en vergel; dadle en arriendo un vergel y lo convertirá en un erial.»

Los economistas que han fundado sus teorías desde sus escritorios en las ciudades, que no han vivido en el campo y no han tenido oportu-

nidad de valorar lo que es el verdadero amor a la tierra, no pueden tener la sensación de ese afecto que el hombre de campo tiene por la tierra propia.

Quien recorra las comarcas cultivadas de un país agrícola descubre que hay enorme diferencia entre el estado de las propiedades arrendadas y el de los predios propios. Ello se debe al amor a la tierra. Es difícil encontrar un arrendatario que tome verdadero interés por atender todo lo que pudiera dar belleza a una propiedad, y se reduce exclusivamente a sacarle provecho. Aun es más grave su posición por cuanto es difícil encontrar un arrendatario que pueda encariñarse con una propiedad ajena, cuando odia a su propietario, que le arrebató la mayor parte del producto de su trabajo. El autor de esta frase —Young— fué un agrónomo que ha recorrido todos los países de Europa y que tenía una gran experiencia sobre la vida rural de esos pueblos. Este principio no es posible destruirlo porque se inspira en el amor a la tierra propia.

Estimo que hay en este mundo dos amores: el que naturalmente tenemos por nuestros padres, por nuestros hijos y por nuestros semejantes, y un verdadero amor a la tierra, que es lo que tiene atados a su propiedad a la inmensa mayoría de los hombres de campo que cultivan su predio. Este motivo de índole sentimental se traduce en un resultado económico positivo, por el cual se aspira a hacer al agricultor propietario de su tierra a la vez que se lo libera de la tiranía del terrateniente, que es también motivo de desequilibrio en la distribución de las riquezas. El latifundista, con su renta, absorbe un alto porcentaje de los beneficios del interés del capital y del trabajo que el arrendatario invierte, ya que debe entenderse por capital los implementos agrícolas y todo útil que el arrendatario emplea en el cultivo de la tierra; y salario, a lo que debe percibir por su trabajo, a lo que hay que agregar la atención de la carga del salario de los obreros que ocupa, todo lo cual deja en evidencia que la renta absorbida por el terrateniente reduce enormemente las posibilidades del agricultor en el sentido de su bienestar y aspiraciones a progresar en lo económico y cultural.

El capítulo II se refiere a los organismos de aplicación y asesoramiento. Refúndense en este capítulo los artículos 2º, 3º y 4º, eliminándose la determinación de los ministerios que estaban representados en el Consejo Coordinador, como también la función de los mismos, por entenderse que es materia de reglamentación.

Por decreto 7.029, del año 1901, fué creado el Consejo Coordinador, organismo que reporta grandes beneficios en virtud de la larga experiencia adquirida por el Banco de la Nación Argentina a través de muchos años de práctica en la aplicación de planes de colonización exito-

tos y la experiencia también muy apreciable de funcionarios de otras reparticiones especializadas, así como la de los representantes del agro, que lo integran.

El capítulo III se refiere a las funciones y deberes de los organismos de aplicación y asesoramiento.

En este capítulo se delimitan con claridad las funciones y deberes a cargo del Banco de la Nación Argentina y del Consejo Coordinador, manteniendo las enunciaciiones del artículo 7º de la ley 12.636, adecuándolas al nuevo régimen funcional, señalándose, entre otras, la de promover activamente la producción agropecuaria mediante la concesión de préstamos y el fomento de las cooperativas y su intervención en el proceso colonizador.

El gobierno del general Perón se empeña en dar a esta institución de crédito una función de gran importancia y de inmensas consecuencias de interés común. No se concibe bajo un gobierno justicialista que una institución de crédito tuviera otro destino que el de tener dinero para engendrar dinero, condición que caracteriza a los usureros despreciados ya desde el tiempo de la antigua Grecia. Las instituciones de crédito, por el contrario, deben procurar invertir los fondos disponibles de modo que redunden en beneficio de la comunidad.

El capítulo IV trata de los planes de colonización. Es nuevo con respecto a la ley 12.636 y en él se adoptan las expresas disposiciones del segundo Plan Quinquenal, en cuanto a orientación y propósitos en materia de colonización.

El capítulo V se refiere a las tierras colonizables. Detallando las tierras que habrán de ser utilizadas por el banco en su acción colonizadora, siguiendo las prioridades indicadas al respecto por el segundo Plan Quinquenal.

El capítulo VI trata de la valuación de las tierras colonizables y sus mejoras. La modificación de la ley 12.636 sobre este punto es fundamental. Se cambia el procedimiento preceptuado por dicha ley para fijar el valor de la tierra, que es referido a dos índices rígidos: valor de valuación para el pago de los impuestos y valor de su productividad apreciado en los diez años precedentes.

Esta manera de establecer tasaciones reduce el justiprecio de los inmuebles ofrecidos en venta a límites muy por debajo del venal y hace problemática la adquisición de tierras óptimas.

Con este sistema se hacen jugar los valores venales de la zona conjugados con los rendimientos físicos de los últimos diez años, y fijados conforme al valor productivo promedio del último quinquenio y también a la valuación fiscal.

La experiencia indica la necesidad de adoptar este arbitrio no sólo para las compras, sino

también para fijar el valor de las expropiaciones, pues hasta este momento los estimados resultan substancialmente inferiores a los establecidos por la justicia.

El capítulo VII se refiere a las normas para adquirir tierras colonizables. En él se propicia otra reforma importante, y es que se faculta al organismo colonizador a adquirir tierras por convenios, por licitación y en remates públicos. En la ley 12.636 las adquisiciones deben ser por licitación, prohibiendo en forma absoluta la compra directa.

Se prescribe que en los convenios de transferencias de tierras colonizables en poder de organismos bancarios o reparticiones públicas, el valor será el mismo de adquisición registrado en sus respectivos patrimonios, o se fijará a propuesta del banco sobre la base de las normas del artículo 9º, sometiendo cualquier diferencia al Tribunal de Tasaciones.

El capítulo VIII trata del régimen de expropiaciones. Los artículos comprendidos en este capítulo contienen una modificación substancial con respecto a la ley 12.636. Para llegar a la expropiación debe cumplir estos extremos: que no existan en la zona a colonizar tierras fiscales, tierras en poder de los ministerios y bancos oficiales, que no les fué posible adquirirlas en licitación o remate de origen privado.

En el proyecto que estamos tratando se declara de utilidad pública o de interés general la tierra que el banco, con aprobación del Poder Ejecutivo, juzgue preciso incluir en los planes colonizadores, siempre que no fueran objeto de una explotación agraria racional.

Si el concepto es amplio, queda, sin embargo, la restricción del precepto de la explotación agraria racional.

Para colocarse los terratenientes dentro de esta valla, deberán dedicar hasta un 30 por ciento de la superficie apta de su fundo a producción hortícola, granjera o tampera. La fijación de las zonas en que regirá ese requisito y el porcentaje será fijado por vía de reglamentación.

Por lo demás, en las expropiaciones se pagará un justo precio, ya que la tierra señalada con esta medida será tasada al igual que la que se adquiera por compra directa.

Esta cláusula coincide con el objetivo general 4, «Uso de la tierra», del segundo Plan Quinquenal, y con conceptos vertidos por el excelentísimo señor presidente al definir la política agraria del superior gobierno en su mensaje a la gente de campo del 11 de junio de 1953 en el teatro Colón.

Las consecuencias de estas disposiciones seguramente influirán beneficiosamente en la transformación agraria del país, en la obtención de alimentos protectores de las poblaciones urbanas y en la economía general.

Se prevé asimismo la situación de muchos pueblos y ciudades ahogados en su desarrollo por latifundios, autorizándose la expropiación sin las limitaciones del artículo 15, cuando sea necesario evitar que se contengan esas expansiones.

El capítulo IX trata de las colonias. En este capítulo priva la idea de relacionar armónicamente las distintas disposiciones de la ley 12.636 desde la subdivisión del inmueble en unidades económicas, reservas con fines de utilidad común, ampliación o creación de pueblos y venta de sobrantes.

Como innovación importante se señala la obligación impuesta al Banco de introducir las mejoras económicamente necesarias, de acuerdo con los planes trazados. Es, pues, un límite conceptual y no numérico, como en la ley vigente, que ha de constreñir al Banco a este respecto. En cuanto a las mejoras particulares, se estatuye la facilitación a las colonias del asesoramiento técnico y crediticio de fomento a largos plazos, preferentemente equiparados al lapso de amortización de la tierra.

Se prevé la implantación de colonias ejidales, tambores, hortícolas y granjeras, de tipo subsidiario, y sus beneficiarios serán obreros de centros poblados. Esta clase de colonización lleva la finalidad de mejorar la vivienda de estos trabajadores que hoy todavía habitan construcciones de precarias condiciones en los suburbios de las ciudades o pueblos de campaña. Igualmente se repite en este capítulo, la necesidad de que los componentes de las colonias se constituyan en cooperativas o bien que se organicen en las ya existentes.

El capítulo X trata de la adjudicación de unidades económicas. En general, se adoptan los requisitos básicos de la ley 12.636, reuniéndose en un solo capítulo, todas aquellas disposiciones que se refieren a las condiciones, preferencias, procedimientos y formalización de las adjudicaciones de lotes.

No obstante, se agregan algunos requisitos, como el de no padecer enfermedades crónicas y defectos físicos que incapaciten para el trabajo rural —que tiene su fundamento en la experiencia recogida— y «que cuenten con implementos agrarios en relación con las actividades a encarar».

Mantiénese el beneficio de la parcela adicional que prescribe la ley 12.636 para el productor que tenga cuatro hijos varones, mayores de 14 años de edad, agregándose: «o seis hijos de cualquier sexo». Lógico es prever la necesidad de la familia numerosa aunque en ella no predominen los varones.

Finalmente, se establecen cláusulas concordes con las de la ley 13.246, de aparcerías y arrendamientos rurales, en lo que se refiere a los privilegios que gozan los ocupantes de

un campo al tiempo de ser adquirido, para ser adjudicatario de la nueva colonia, como también para los exceptuados de las prórrogas legales.

El capítulo XI se refiere a los derechos y obligaciones de los adjudicatarios. Se estructura este capítulo correlacionando a cada derecho su respectiva obligación, cuyas disposiciones estaban dispersas en la ley 12.636. Así, se repite, entre las ventajas que se acuerdan, la de obtener préstamos de fomento para la instalación, vivienda y habilitación por parte de los colonos. Se mantiene, al igual que en la ley 12.636, el beneficio del 5 por ciento de reducción del precio de venta del lote por cada hijo que nazca en el predio, la ampliación de la concesión por cada seis hijos de cualquier sexo o cuatro varones, cuando uno de sus hijos constituya un hogar económicamente independiente, tendrá derecho a un lote a nombre de ese hijo o yerno del adjudicatario que reúne las condiciones de la ley.

Estos dos últimos supuestos son nuevos con respecto a la ley 12.636. Este artículo que lleva el número 40 es para nosotros de gran significación en el sentido de la multiplicación de la población y cada vez que nuestros delegados han concurrido a Europa por motivos relacionados con problemas sociales han recogido expresión de asombro por el hecho de que aquí se fomenta la multiplicación de la población. Me refiero a esto, debido a que desde el siglo XVIII, un economista inglés, Malthus, al dejar sentada su famosa ley, expresó que mientras los medios de subsistencia aumentan en proporción aritmética, la población se multiplicaba en proporción geométrica, vale decir, que mientras los aumentan como 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, las poblaciones se multiplican como 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera. Indudablemente, Malthus se habrá inspirado en los primeros serios problemas que se producían ya en la China, en la India, y tal vez en las consecuencias producidas por la explotación del hombre de campo, que era ya desde entonces motivo de reducción de la producción. Cuando se traiciona una correcta ley de la distribución de la riqueza y el terrateniente absorbe la mayor parte de la renta, el arrendatario se ve colocado ante el riesgo de ruina, y cuando el arrendatario tiene que afrontar el pago de salarios es el obrero el que sufre en último término las consecuencias de la reducción que le impone a su vez el arrendatario. Nace entonces la miseria y disminuye la producción

—Ocupa la Presidencia el ingeniero Alberto J. Iturbe, presidente provisional del Honorable Senado.

El ideal que persigue nuestro gobierno es establecer el equilibrio de la renta, del interés del capital invertido y del salario.

Malthus proponía como una segura solución la adopción de recursos para limitar la multiplicación de la población. Esto ha traído consecuencias en el orden económico (aparte de las de orden moral) que se están cumpliendo en Europa y en América, por cuanto han despertado el interés del capital en el sentido de la adquisición de enormes extensiones de tierras para arrendarlas. Sobrevino un verdadero interés por aumentar la producción para evitar que se cumpliera la ley de Malthus, puesto que en muchas partes se suponía que dicha ley se cumpliría a breve plazo. Posiblemente Malthus no ha pensado que hay una fuerza divina, una fuerza superior, que rige esos acontecimientos por medios que escapan a la voluntad de los hombres y que por sí solos reducen poblaciones enteras. Pareciera que en aquel entonces el atraso de las ciencias no les hubiera permitido concebir una era como la nuestra, en la que mientras las ciencias nobles que velan por la salud de la humanidad progresan en proporción aritmética, las armas de guerra aumentan su poder en proporción geométrica. Posiblemente Malthus no se imaginó que toda la población que podía reproducirse a través de los siglos podía desaparecer en un solo día por obra del egoísmo de los hombres.

En el capítulo XII, que trata de la venta y forma de pago de las unidades económicas, se introducen modificaciones substanciales al régimen de la ley actual en lo que respecta a la venta y forma de pago de la tierra adjudicada. Asimismo, se incorpora, por razones de un mejor ordenamiento, el artículo 43 de este capítulo. En efecto: la ley 12.636 establece que la suma total que resulte de la venta de cada inmueble no podrá ser inferior a su precio neto de costo, ni excederlo en más de un 15 por ciento. Esta rigidez impide atribuir distintos valores a la tierra que debe ser nuevamente adjudicada, lo que produce situaciones que es necesario evitar. Tierras adquiridas en 1942 deben conservar su primitivo precio en 1954, a pesar de que han sido mejoradas por el trabajo y de haberse modificado por su valorización en el mercado inmobiliario.

Además, ese índice impidió al ex consejo y al banco la realización de un plan integral de mejoras generales en las colonias, hecho que pudo superarse aplicando reglamentaciones propias del banco.

En cuanto a la forma de pago, se busca acortar los plazos de amortización, fijando un servicio de hasta un 5 por ciento, incluyendo amortización e intereses, en lugar del medio por ciento e interés del 2½ por ciento de la ley 12.636.

Se elimina totalmente el arrendamiento con opción a compra, por ser contradictorio con los expresos dictados de la política del gobierno.

Asimismo, se prescribe que al establecerse la escala total de pagos prevista, se tendrá en

cuenta que los adjudicatarios deberán abonar también otras deudas, lo que hará más fácil la atención de esos servicios por parte de éstos.

El pago en especie que estatuye la ley 12.636, se elimina. Siendo el Estado quien adquiere las cosechas, esa cláusula resulta hoy innecesaria y sólo sirve para complicar las operaciones contables.

Facúltase al banco, al igual que la ley actual, a suspender el pago de los servicios, ante pérdida total o parcial de las cosechas, y los servicios atrasados se correrán al vencimiento siguiente, sin acumularse y sin interés punitivo.

Queda, una vez más, evidenciada la tolerancia de la institución de crédito, en contraposición a la rigidez anterior, cuando una persona favorecida por un crédito al vencimiento de su obligación era irremediablemente ejecutada. El viejo chiste de que los bancos prestaban el paraguas cuando el cliente concurría bajo un sol radiante, y se lo negaban bajo el rigor de la tormenta, desaparece hoy totalmente con las nuevas normas impuestas por la función agraria actual que se ha adjudicado el banco.

En general, las condiciones establecidas son generosas y consultan el enunciado de facilitar a los productores su acceso a la tierra.

El capítulo XIII trata del fondo de ahorro.

Si bien en principio se pensó en eliminar la obligación de constituir un fondo de ahorro por parte de los productores, nuevos estudios realizados sobre los resultados de diversas explotaciones determinaron mantenerlo en el texto definitivo.

En consecuencia, los cuatro artículos que integran este capítulo (49 al 52), se corresponden en sus propósitos a los enunciados en los artículos pertinentes, 38 al 43, de la ley actual, con la variante que no se fija un porcentaje de hasta el 4 por ciento del precio de venta del predio con destino a ese fondo, porque así lo aconsejan los resultados aludidos, el que servirá como reserva ante las contingencias agrícolas, solventar gastos de asistencia médica y acelerar la amortización del saldo del precio del lote. En la ley, en cambio, tiene prioridad la amortización del saldo de precio del lote, cada vez que el fondo alcance al 10 por ciento de ese precio y el resto para contingencias agrícolas.

En ambos casos, ley y proyecto, las sumas se depositarán a nombre del depositario y devengarán el interés común de caja de ahorro. El mantenimiento de la obligación de constituir el fondo de ahorro es beneficioso por muchos conceptos; para el banco, porque le permite acelerar los pagos y reembolsar sumas que continuará invirtiendo en la obra colonizadora; y para el colono, que, en último análisis, es el más beneficiado con este ahorro.

El capítulo XIV trata de la vivienda rural. Este capítulo modifica fundamentalmente la ley 12.636, que en esta materia es restrictiva, pues

fija el tope de 6.000 pesos para vivienda y habitación, cantidad ya exigua cuando fué sancionada. En una ley inspirada en los principios del segundo Plan Quinquenal, debía concederse toda la importancia que reviste la vivienda del agricultor. Por ello no se fijan límites, que están dados por las necesidades de la familia y las previsiones de su crecimiento, ofreciéndose el asesoramiento técnico y la inspección de obras en forma gratuita. Los préstamos de esta naturaleza se equipararán al de la tierra, en cuanto al plazo de amortización e intereses.

El capítulo XV trata de la conclusión de las adjudicaciones.

Se estructura en forma independiente a fin de coordinar las causas y efectos a que da lugar la conclusión de la adjudicación.

Para la ley 12.636 la rescisión se funda en la falta de cumplimiento de la obligación de residir en el lote; dejar de pagar los servicios y por incumplimiento de las cláusulas contractuales, condenando en cualquier caso al colono al pago del tres por ciento del valor de venta del lote, en concepto de arrendamiento, y devolviéndole lo amortizado.

El proyecto distingue la rescisión de común acuerdo; la caducidad por incumplimiento de obligaciones, y el fallecimiento.

La rescisión de mutuo acuerdo —por causas ajenas a la voluntad del colono—, no debe traer aparejada una sanción. Bastará, en concepto de arrendamiento, los intereses pagados mientras ocupó el predio, indemnizándolo por las mejoras útiles incorporadas al mismo y devolviéndole lo amortizado y su saldo del «fondo de ahorro».

En cambio, en la caducidad —que siempre se origina en faltas contractuales—, sólo se reembolsará el valor de las mejoras útiles y el fondo de ahorro —fruto de su trabajo—, previa deducción del equivalente del 3,25 por ciento sobre el precio de venta del lote en concepto de arrendamiento. Aquí el pago tiene carácter de sanción.

En cuanto a la conclusión de la adjudicación por el fallecimiento, ya está prevista en el capítulo anterior, y en caso de no continuar los herederos con la explotación del predio, se aplicará las cláusulas referentes a rescisión.

El capítulo XVI se refiere al título de propiedad y sus caracteres. Para la ley 12.636 el otorgamiento del título se opera cuando el saldo amortizado más el monto del fondo de ahorro alcance al 50 % del precio de venta del predio. Este hecho llega, teóricamente, después de 32 años de la fecha de posesión.

En el proyecto se señalan dos requisitos para el otorgamiento del título: cumplimiento de las obligaciones y transcurso de 10 años desde las posesión del lote. Se elimina, por innecesaria, la cláusula de la ley 12.636, en cuanto dispone la constitución de una hipoteca a favor del Banco Hipotecario Nacional, al llegarse a la amortiza-

ción del 50 por ciento del valor del predio frente a la nueva organización del sistema bancario oficial. Declárase inembargable e inejecutable el dominio de los predios, y las medidas precautorias que se tomen contra el adjudicatario no podrán afectar el normal desarrollo de la explotación del predio. Esta medida se adopta en defensa del propio productor y del banco en el cobro de su crédito.

También se declara en forma expresa la indivisibilidad en el tiempo y en el espacio de las unidades económicas, salvo en los casos que se prevé conforme lo quiere el segundo Plan Quinquenal.

Prohíbese la constitución de derecho real alguno sobre la parcela como también transmitir o enajenar el dominio a terceros, siendo nulas las transmisiones que se hagan contrarias a las disposiciones de la ley. Estas cláusulas y las de mantener el predio en grado racional de productividad mediante el concurso familiar rigen para los sucesivos adquirentes, sin término de prescripción. En su defecto, el banco podrá expropiar esa tierra; con ello se persigue evitar en forma efectiva la subdivisión de las unidades económicas, asegurar tierras a auténticos agricultores y que siempre estén racionalmente explotadas.

Finalmente, se prevé la transmisión de derechos por fallecimiento. Respondiendo al concepto de que estas tierras de colonización constituyen un bien de familia, se previene que el predio no admitirá división, a cuyo efecto la adjudicación continuará con los herederos del causante, y en caso de que alguno de ellos se desinterese de su explotación, se instituye un sistema para que el banco acuerde crédito a los herederos excluidos.

Es fácil darse cuenta del interés que se toma el proyecto en evitar las subdivisiones de la propiedad, no solamente por el hecho de que una propiedad dividida pierde ya su condición de unidad económica, sino que a consecuencia de la subdivisión las propiedades adquieren extensiones tan reducidas que llega un momento que ya no significa la seguridad de la subsistencia de una familia y algunas veces ni de una persona. Entonces, se crea la obligación de comenzar a vender a la persona pudiente del vecindario la que comienza a concentrar propiedades convirtiéndose al poco tiempo en un nuevo latifundista.

A tales fines, los jueces no aprobarán tasación, partición ni adjudicación de bienes comprendidos en esta ley. De este modo, repito, será posible evitar la partición de unidades económicas en el tiempo y en el espacio.

El capítulo XVII se refiere al régimen financiero. Una de las mejores razones tenidas en cuenta para confiar al Banco de la Nación la ejecución de los planes de colonización, ratificados en el segundo Plan Quinquenal, ha sido la

posibilidad de dotarlo de los recursos financieros para que su realización sea efectiva. Conforme a lo expuesto, se declara que para el cumplimiento de esta ley el banco utilizará los recursos que fije el Ministerio de Finanzas, y al propio tiempo se indica que ingresan al patrimonio del banco los bienes adquiridos en función de la ley 12.636, y sus distintos producidos. En cambio, se introduce una disposición por la cual, cuando se trate de incorporar determinadas zonas a la riqueza nacional y sean imprescindibles inversiones extraordinarias de fomento, éstas serán realizadas por el Estado en un porcentaje que permita al auténtico productor recibir la tierra en tal grado económico, que pueda abonarla con el producto de su trabajo.

Hasta hace pocos años privaba el concepto de que el Estado, actuando como un comerciante, sólo podía invertir sus recursos, sobre todo el de las instituciones de crédito, allí donde hubiera la seguridad de recobrar el valor del préstamo en breve plazo, sumado a él los intereses. No se concebía la posibilidad de que el Estado pudiera sacrificar enormes sumas en la habilitación de tierras que, por cualquier motivo —erosión u otras condiciones geológicas—, hubieran perdido o no tuvieran originariamente aptitud para el cultivo. Así como se ha interpretado que buena parte de los recursos del Estado deben invertirse para cuidar de la salud pública, en el proyecto se contempla la necesidad de que también puedan sacrificarse importantes sumas en la habilitación de tierras, las que con el tiempo han de ser segura fuente de bienes alimentarios, que igualmente importan a la salud pública.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, contraalmirante (R.) Alberto Teisaire.

Es un hecho ya sometido a ensayo en algunos países de Europa, donde se han habilitado pantanos, hondonadas o pequeñas superficies diseminadas en las cumbres y laderas, previa la provisión de riego. De ello nos habla elocuentemente lo ocurrido en Italia en los años anteriores y posteriores a 1930, donde con motivo de las ampliaciones de los campos de cultivo se ha registrado un aumento de varios millones de habitantes. Igualmente tenemos el ejemplo de países que están aprovechando las pequeñas cantidades de agua de vertientes existentes en las cimas de los cerros, para producir energía eléctrica en pequeñas usinas familiares que se van sucediendo en la medida del descenso de la corriente. Es decir, se produce el aprovechamiento de la energía hidráulica de la pequeña cantidad de agua que surge de las montañas y las pequeñas superficies de tierra enclavadas en las mismas.

Entre nosotros, en la República Argentina, no se ha llegado todavía a ese estado, pero es necesario prevenirlo con las leyes actuales para contemplar estas situaciones en lo futuro.

Es evidente que esas incorporaciones involucran gastos y plazos de recuperación que exceden la capacidad o facultad del banco que debe pagar, entre tanto, intereses por los márgenes que se le acuerden. Es lógico, pues, que el Estado, —con sus fondos de rentas generales o negociación de títulos— aporte ese porcentaje a la obra.

El capítulo XVIII, trata de la colonización con las provincias. La ley 12.636 en su artículo 17 preceptúa que se colonizará preferentemente en las provincias que dicten leyes disponiendo determinados privilegios a favor del organismo colonizador.

Si bien todas las provincias adhirieron a dicha ley, esta prelación no consulta hoy la unidad política que presenta la Nación.

En consecuencia, en este nuevo capítulo, se ofrece a las provincias que se acojan al régimen propuesto la participación financiera del banco para sus obras de colonización, acogimiento que comporta correlativamente una serie de obligaciones que hará efectiva una perfecta coordinación en los planes de colonización tan necesaria y hasta ahora no lograda.

El capítulo XIX, trata de la colonización privada. En este capítulo se mantiene conceptualmente el capítulo XVII de la ley 12.636 y se trata con ello de promover la colonización privada en cuanto sea compatible con los principios generales del segundo Plan Quinquenal. En esa inteligencia, el proyecto ofrece asistencia crediticia a aquellos propietarios que resuelvan vender sus tierras a sus arrendatarios, siempre que sometan al banco los estudios técnicos y económicos de la subdivisión.

Además, se exige de sellado y de inscripción con el propósito de que la tierra sea barata para sus adquirentes. Con ello se espera que se logrará activar la subdivisión de la gran propiedad rural.

La cláusula de más importancia en este capítulo, es aquella que estatuye que de conceder el banco los créditos necesarios quedan automáticamente incorporados al régimen de la ley, tanto las tierras a colonizar como los productores adquirentes, es decir, sujetos a las limitaciones y restricciones que se preceptúan.

El capítulo XX, se refiere a disposiciones de carácter general. Del análogo capítulo de la ley 12.636, se eliminan disposiciones que ya no son actuales: organización de las colonias de tipo familiar en convención con la Gendarmería Nacional, creación de colonias aborígenes e incorporación de la Dirección Nacional de Tierras al régimen de la ley de colonización.

Mantiénese, en cambio, la mayoría de sus disposiciones desde la institución de los consejos agrarios en cada colonia, hasta la facultad de recurrir a la vía de apremio para cobrar sus créditos.

Se incluye, empero, un nuevo artículo por el cual se determina que el producido de la venta y arrendamiento con opción a compra de los inmuebles adquiridos en función de la ley 12.636 y el reembolso de los préstamos autorizados en virtud de la misma, se afectarán a la amortización de las sumas anticipadas por el banco de acuerdo con el decreto 6.341/48, que oportunamente hizo posible la expropiación de una serie de inmuebles.

Por las razones que acabo de expresar anticipo mi voto favorable al despacho de la comisión, y lo solicito de la Honorable Cámara, por tratarse —insisto— de uno de los proyectos de mayor trascendencia en el orden político, social y económico del país. (*Aplausos.*)

6

MOCION PARA PASAR A CUARTO INTERMEDIO

Sr. De Paolis. — Pido la palabra.

Hago moción para que el Honorable Senado pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 9, para seguir tratando este proyecto de ley.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción del señor senador por Mendoza.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Invito a las señoras y a los señores senadores a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 9 horas.

—Así se hace.

—Eran las 13.

ANGEL A. BARNETTE.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.